RECONSTRUYENDO LA LAICIDAD DESDE EL CONTEXTO HISTÓRICO MEXICANO

RECONSTRUCTING SECULARISM FROM THE MEXICAN HISTORICAL CONTEXT

JOSÉ LUIS LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS
Universidad Loyola

https://doi.org/10.55104/ADEE_00039

Recibido: 21/01/2025

Aceptado: 23/02/2025

Resumen: Algunos estudios consideran que México es un país laicista en el que su legislación ignora o reduce las religiones al ámbito privado o en el que sus gobernantes han legislado con animadversión religiosa, cuanto menos, contra el catolicismo que profesa la mayoría de la población. Sin dejar de ser cierto que en la convulsa historia mexicana ha habido períodos de anticlericalismo, indiferencia y persecución religiosa, las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas mexicanas han sido complejas. Durante el período juarista se promulgaron leyes de reforma que separaron el Estado de la Iglesia católica, en un régimen laico *de facto* que se consolidó y gestionó en la época revolucionaria y post-revolucionaria, con aciertos y errores. Las políticas neoliberales de los años 70 y los profundos cambios de los años 90, frutos de los nuevos contextos internacionales y nacionales, provocaron un paulatino acercamiento entre los gobernantes y los líderes de las asociaciones religiosas, que se ha ido incrementando hasta el presente. Mientras que, por un lado, la laicidad aparece expresamente reconocida en 1992 –en el art. 3 de la Ley de asociaciones religiosas y culto público (LARCP)–, y en 2012 –con su inclusión en el art. 40 de la Constitución (CPEUM)–, sin embargo, algunos autores consideran que la mayor relevancia de las religiones en el espacio público estaría edulcorando la laicidad «a la mexicana», vaciándola de contenido. En el debate actual, en el que México está adaptando su sistema jurídico a un

entorno plurilegalista debido al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la doctrina reflexiona acerca de la esencia, el dinamismo y los procesos de la laicidad mexicana, deconstruyendo sus elementos históricos para reconstruir una laicidad evolucionada que resulte significativa en el XXI¹.

Palabras clave: Laicidad, México, Libertad religiosa, Libertad de conciencia.

Abstract: Some studies consider Mexico a secular country where its legislation, at the very least, either ignores or confines religion to the private sphere or where its rulers have legislated with religious animosity, particularly against Catholicism, which is professed by the majority of the population. While it is true that Mexico's turbulent history includes periods of anticlericalism, indifference, and religious persecution, the relationship between the State and Mexican religious associations has been complex. During the Juárez period, reform laws were enacted to separate the State from the Catholic Church, establishing a *de facto* secular regime that was later consolidated and managed during the revolutionary and post-revolutionary eras, with both successes and shortcomings. The neoliberal policies of the 1970s and the profound changes of the 1990s –driven by new international and national contexts– led to a gradual rapprochement between the rulers and leaders of religious associations, a trend that has continued to the present day. On the one hand, secularism was explicitly recognized in 1992 –through Article 3 of the Law of Religious Associations and Public Worship (LARCP)– and in 2012, when it was included in Article 40 of the Constitution (CPEUM). On the other hand, some authors argue that the growing influence of religion in the public sphere is diluting secularism «*la Mexicana*», effectively emptying it of substance. In the current debate, as Mexico adapts its legal framework to a plurilegal environment recognizing the rights of indigenous peoples, scholars reflect on the essence, dynamism, and processes of Mexican secularism. This reflection involves deconstructing its historical elements to reconstruct an evolved secularism that is meaningful in the 21st century.

Keywords: Secularism, Mexico, Religious freedom, Freedom of conscience.

¹ Este es el hilo temático que sigue Émile POULAT en su libro *Nuestra laicidad pública* (2003, en traducción española de 2012): instituir la laicidad, gestionarla, pensarla y decodificarla. Esta decodificación exhibe los elementos necesarios para reconstruirla con un significado que resulte inteligible para los tiempos actuales.

SUMARIO: 1. Un pueblo integrador en lo religioso. 2. El catolicismo y el clero como *causa belli*. 3. El progresivo acercamiento entre el Estado y las religiones. 4. El reconocimiento de la laicidad en un entorno religiosamente plural. 5. La deconstrucción de la laicidad. 5.1 Una laicidad formal en una aconfesionalidad material. 5.2 Religiones y ministros de culto en el sistema electoral mexicano. 5.3 Igualdad formal y discriminación real entre religiones y creyentes. 5.4 El cuestionamiento de la laicidad desde los sistemas normativos internos indígenas. 5.5 El constructo laico mal construido. 6. Reconstruyendo la laicidad. 6.1 Visión panorámica. 6.2 Consensos respecto al alcance de la laicidad. 6.3 Una laicidad en evolución y progreso.

1. UN PUEBLO INTEGRADOR EN LO RELIGIOSO²

Sigue habiendo muchos lugares comunes acerca de los pueblos mesoamericanos, la conquista y la Colonia española, la Independencia y la vida de México como nación. En este apartado expondré los principales acontecimientos históricos que han conformado el México actual, que es plural en su vertiente religiosa y laico en su vertiente institucional³.

Los habitantes que poblaron antiguamente lo que hoy conocemos como México fueron profundamente espirituales y religiosos. Las religiones de los primeros pobladores de la civilización mesoamericana, hace aproximadamente 4000 años, se fueron desarrollando en las diferentes culturas de Mesoamérica. Aunque cada pueblo tuvo su propia cosmovisión particular, gran parte de la historiografía considera que existió una cosmovisión mesoamericana, holística e inclusiva, que compartía los mismos rasgos religiosos y que, de alguna forma, se ha prolongado sincréticamente hasta la actualidad, yuxtaponiendo y subordinando sus elementos prehispánicos a un catolicismo que los indígenas resimbolizan desde sus mitos originarios, en lo que los católicos tradicionalistas o costumbreros denominan «el costumbre».

² Este trabajo se enmarca en el Proyecto «Asimetrías en el régimen financiero, patrimonial y de la seguridad social de las confesiones», PID2023-147184NB-I00, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Convocatoria de 2023 de Proyectos de generación de conocimiento en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

³ En este trabajo recupero algunas ideas y datos históricos que ya expuse en mi monografía LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, José Luis, *Paradigmas religiosos de los pueblos indígenas de México*, Tirant lo Blanch, México, 2024, pp. 481.

En los centros urbanos de la época clásica (250-950) se construyeron las grandes pirámides escalonadas como centros ceremoniales y el comercio facilitó el intercambio cultural y la difusión del culto dominante entre pueblos colindantes. Al caer Teotihuacán, varios pueblos se disputaron la hegemonía de la zona durante el período postclásico –que fue el de mayor expansionismo y militarismo–, en guerras en las que se acabará imponiendo el pueblo azteca-mexica (1325-1521). En 1325 los aztecas se establecieron en el lago Texcoco del Valle de México y edificaron su capital, Tenochtitlan, bajo el amparo del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Formaron la Triple Alianza junto a los pueblos Texcoco y Tlacopan y conquistaron a todos sus vecinos, difundiendo sus cultos y sus dioses, principalmente Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Cuando llegaron los españoles, el *tlatoani* era Moctezuma II Xocoyotzin (1502-1520), al que sucedió Cuitláhuac (1520) y Cuauhtémoc (1520-1525), al que venció Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521. En muchos aspectos, Mesoamérica y Europa eran similares al tiempo de la conquista española: «predominio de la vida rural, con alrededor de 30 años de esperanza promedio de vida..., despotismos hereditarios y tributos excesivos, religiosidad ferviente, pocas libertades y demasiadas obligaciones, escasas oportunidades»⁴.

Con anterioridad al descubrimiento de América, Portugal y España ya se habían consolidado como potencias marítimas en el Atlántico, lo que había dado lugar a conflictos territoriales y dinásticos, que dirimieron, en 1479, en el Tratado/Paz de Alcaçobas⁵. El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahani/San Salvador, en el Nuevo Mundo. Inmediatamente después de ese primer contacto, Castilla obtuvo del Papa Alejandro VI unas Bulas que fijaban los límites de influencia de castellanos y portugueses y que les permitieron explorar el Atlántico en aras a la evangelización de los habitantes de las nuevas tierras⁶. Las diferencias generadas con Portugal se resolvieron posteriormente, en el Tratado de Tordesillas, de 7 de junio de 1494. Las Bulas alejandrinas y este último Tratado justificarían jurídicamente la conquista.

Varios Documentos quisieron resolver cuál era la relación entre la Corona y sus colaboradores, los conquistadores, y cuál era la condición y el tratamiento que se debía dispensar a los indígenas. Entre otros, destacan las *Capitulacio-*

⁴ WARMAN, Arturo, *Los indios mexicanos en el umbral del milenio*, FCE, México, p. 45.

⁵ España y Portugal aceptaron las conquistas mutuamente efectuadas y se repartieron la zona de influencias del Océano Atlántico. El Papa Sixto IV refrendó este Tratado mediante la Bula *Aeterni regis*, de 21/06/1481.

⁶ En la Bula *Inter Coetera*, de 4/05/1494, el papa Alejandro VI justificaba la conquista y la colonización en base a la evangelización: «os imponemos de enviar... hombres honestos y temerosos de Dios, instruidos, hábiles y llenos de experiencia, para que instruyan a los nativos y a los habitantes en la fe cristiana y les inculquen buenos principios».

nes de Santa Fe de Granada, de 17 de abril de 1492; la *Real Cédula* de 20 de junio de 1500, de Isabel la Católica; las 35 *Ordenanzas de las Leyes de Burgos u Ordenanzas Reales para el buen Regimiento y Tratamiento de los Yndios* (1512) –que sancionó Fernando el Católico–, y las *Leyes Nuevas de Indias* (1542), de Carlos V, que estuvieron en vigor hasta 1721 –aunque en desuso desde mucho antes–, y que –con la oposición de los encomenderos–, reformaron la praxis india para proteger a los indígenas frente a los abusos existentes, en base a una relativa influencia del dominico fray Bartolomé de las Casas (1484-1566).

En 1508 Yáñez Pinzón y Díaz de Solís se adentraron en el Golfo de México, contactando con aztecas. En 1517 el Gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, envió tres barcos comandados por Francisco Hernández de Córdoba para que incursionaran en el Yucatán. Un año después, la expedición de Juan de Grijalva recorrió el Golfo de México. En febrero de 1519, sin el preceptivo permiso de Diego de Velázquez, Hernán Cortés partió hacia México con 11 barcos y poco más de 500 hombres, entre los que estaban el mercedario fray Bartolomé de Olmedo y el clérigo secular Juan Díaz, a los que años después se unirían religiosos provenientes de órdenes mendicantes⁷.

Cortés se alió con los mayas totonacos, con los otomíes y con los pueblos pertenecientes a la confederación de Tlaxcala para luchar contra los mexicas. El 18 de octubre de 1519 los españoles masacraron a unos 6.000 indígenas de Cholula, ciudad tributaria de los mexicas. Cortés y Moctezuma II se encontraron el 8 de noviembre de 1519 y, seguidamente, este último fue hecho cautivo en Tenochtitlan. Después de batallar año y medio, el 13 de agosto de 1521 Hernán Cortés venció a Cuauhtémoc, sucesor de Moctezuma, quedando los españoles como dueños de la mayor parte del territorio e instaurando, en 1535, el Virreinato de Nueva España dentro del Imperio español.

Durante los tres siglos novohispanos se trasplantaron algunas instituciones –públicas y privadas–, procedentes de la metrópoli y se crearon otras de nuevo cuño para regular las relaciones entre los españoles, la población indígena y la emergente población mestiza y luego criolla. Los Reyes españoles tenían la autoridad suprema en el Virreinato, aunque el gobierno ordinario recaía en el Real y Supremo Consejo de Indias, de Sevilla. El Virrey representaba los intereses del monarca y concentraba los cargos de capitán general, de presidente de la Audiencia, de gobernador, de superintendente de la Real Hacienda y de vice-

⁷ La conquista espiritual se inició con la llegada de los franciscanos (1523-24) en la zona central y occidental del país; los dominicos (1526), en el centro, y los agustinos (1533), en el noreste. A partir de 1572 se añadió la Compañía de Jesús, en la zona septentrional.

patrono de la Iglesia católica. En 1776, Carlos III reformó el Virreinato, el cual acabó desapareciendo cuando México obtuvo la Independencia, en 1821.

Aunque los reyes españoles promulgaron leyes e instituciones que protegieron a los indígenas –creando el oficio de protector de los indios⁸–, no ejecutaron políticas efectivas contra los abusos que los españoles cometían contra los indígenas. En Real Cédula de 1548 se crearon las «repúblicas de indios» – en contraposición a las «repúblicas de españoles»–, para evangelizarlos, recolectar sus tributos y controlar sus servicios en los turnos de los repartimientos. Desde 1530 se fueron creando diócesis con clero propio⁹ y, a lo largo del siglo XVI, se celebraron los tres primeros Concilios Provinciales de Nueva España (1555, 1565 y 1585).

En el Virreinato también se implantaron dos instituciones de derecho eclesiástico y canónico, el Real Patronato indiano y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Desde la conquista hasta la Real Cédula del Real Patronato de 1574, los reyes españoles fueron patronos y, a partir de esa fecha, vicarios del Papa en lo relativo a la Iglesia católica en las Indias¹⁰. Por su parte, el Santo Oficio de la Inquisición se estableció oficialmente en Nuevo México en 1571, aunque anteriormente ya hubo procesos y condenas de españoles y, puntualmente, de indios. Dentro de la Real Audiencia se estableció en 1573 el Juzgado General de Indios para resolver judicialmente asuntos relativos a los indígenas. Diversas Leyes, Reales Cédulas y Ordenanzas –luego reunidas en la *Recopilación de Indias*–, permitieron a los aborígenes organizarse según sus usos y costumbres, siempre que no fuesen injustas. En las encomiendas –que estuvieron en vigor entre 1521 y 1721–, los encomenderos recibían tributos de los indios asentados en ellas, a cambio de protección y adoctrinamiento cristiano. El requerimiento fue el documento formal que los conquistadores leían a los indios, comunicándoles su condición de súbditos de la Corona y de la Iglesia, a la par que ellos aceptaban ser catequizados y bautizados: el rechazo de estas

⁸ En 1517 Bartolomé de las Casas recibió del cardenal Cisneros el oficio de «protector universal de todos los indios de Indias» y contó con un equipo de religiosos, funcionarios y caciques indígenas que le ayudaron en su tarea de representación de los indígenas ante los organismos españoles. En 1591 se institucionalizó el cargo en los Juzgados Generales de Indios. Canonistas y teólogos de la época discutieron en las Universidades acerca de los justos títulos de conquista y, en las Juntas de Burgos (1512) y de Valladolid (1550-1551), acerca de la condición de los naturales de América.

⁹ Para solucionar los conflictos entre clérigos seculares y religiosos, Felipe II privilegió la concepción benefical de los obispados (cfr. Real Cédula *acerca de los derechos patronales sobre todas las Iglesias de las Indias*, de 1/06/1574). La autonomía de las órdenes religiosas terminó con la Real Cédula de Fernando VI de 4/10/1749, confirmada en el IV Concilio mexicano (1771).

¹⁰ Administración de rentas, pago de diezmos, provisión y nombramiento de oficios eclesiásticos, construcción de iglesias, fundación de conventos, misiones, etc.

cláusulas legitimaba a los españoles al empleo de la fuerza para imponerlas por las armas.

La conquista española significó una nueva fractura para los indígenas, pero mientras que las anteriores guerras en Mesoamérica fueron entre pueblos culturalmente afines, ahora se trataba de una ruptura absoluta e inasumible: sólo la vida misma produjo –naturalmente y con el debido tiempo–, un mestizaje social, cultural y religioso, *a priori* inconcebible, en el que las tradiciones españolas y las indígenas se amalgamaron en un proceso sincrético que continúa hasta el presente¹¹.

Se persiguieron y prohibieron los cultos autóctonos, que fueron sustituidos por un catolicismo que hoy día sigue conservando rasgos indígenas, como los tiene la Virgen de Guadalupe, de honda raigambre y devoción en México desde los tiempos de la conquista. Los indígenas no accedieron a los gremios, pero sí a asociaciones, cofradías y hermandades de tipo religioso (vinculadas a imágenes que identificaban a sus comunidades particulares), benéfico (de recíproca ayuda material) y sacramental (de sufragio), en las que los indígenas desempeñaban cargos cívico-religiosos, como las mayordomías, asumiendo responsabilidades sociales y devocionales muy acordes con el componente comunitario de sus pueblos.

Desde el primer momento de la conquista encontramos indígenas que –voluntaria o de forma forzada–, se adaptaron a la convivencia, cultura y religión de los españoles; a otros indígenas que coexistieron –simulando una adaptación–, o a otros que se apartaron del contacto con los españoles, rechazando lo foráneo con tumultos y rebeliones indígenas. Las sublevaciones indígenas –que muchas veces tuvieron un origen y una motivación profética, mesiánica o milenarista, como bien han puesto de relieve diversos autores¹²–, fueron una constante durante la conquista y la Colonia españolas; se prolongarían tras la Independencia e incluso han continuado hasta la actualidad, con el levantamiento zapatista de Chiapas de 1 de enero de 1994. Sin extrapolar los parámetros de dignidad ni el entendimiento de los derechos humanos que gozamos en el siglo XXI, hubo evangelizadores indignos que no respetaron los más elementales derechos de los indígenas y hubo otros con comportamientos dignos de encomio que protegieron las vidas y promocionaron los derechos de los indígenas,

¹¹ DEL VALLE TORRES, Luis Gerardo, «Mestizo, identidad mexicana», en CONTRERAS BUSTAMANTE, Raúl, GARAY GARZÓN, Víctor Manuel, DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, Jesús, SANDOVAL JIMÉNEZ, Israel, *500 años: el complejo encuentro de dos mundos (hacia una visión panorámica)*, Tirant lo Blanch, México, pp. 287-300.

¹² Alicia BARABAS, Antonio PORRO y Miguel Alberto BARTOLOMÉ, entre otros.

como ha quedado consignado en las *Crónicas*¹³ y en otros escritos de la época que narraban el proceso evangelizador, como los de los franciscanos Jerónimo de Mendieta (*Historia eclesiástica indiana*) y Bernardino de Sahagún (*Historia general de las cosas de Nueva España*)¹⁴.

Frente a quienes ensalzan acríticamente el proceso evangelizador y a quienes lo culpabilizan de todos los males¹⁵, el Papa Francisco propuso en 2021 que se asumiesen los errores y los aciertos de la evangelización americana para superarlos desde una fraternidad que priorizase el bien común¹⁶. Dos años después, en 2023, la *Nota* conjunta de los Dicasterios vaticanos para la Cultura y la Evangelización y el Servicio para el desarrollo humano integral, promoviendo la reconciliación y la sanación, renegó de la «doctrina del descubrimiento» que en su momento había permitido adquirir o poseer tierras de indígenas en base a documentos papales, reconociendo, asimismo, «los terribles efectos de las políticas de asimilación y el dolor experimentado por las poblaciones indígenas, así como pedir perdón»¹⁷.

2. EL CATOLICISMO Y EL CLERO COMO CAUSA BELLI

La independencia de México (1810-1821) se fraguó poco después de las revoluciones norteamericana (1775-1776) y francesa (1789-1799) y al mismo tiempo que la Guerra de la Independencia española (1808-1814). En contraste con los valores y principios del Antiguo Régimen, fue abriéndose paso el con-

¹³ Con este nombre genérico se subsumen diversos escritos, entre los que destaca la *Historia verdadera de la conquista de Nueva España* (1632), de Bernal Díaz del Castillo.

¹⁴ También, Bernal Díaz del Castillo, Bernardino de Sahagún, Diego de Landa, Martín de Jesús, Antonio de Montesinos, Toribio de Motolinía, Jerónimo de Mendieta, fray Julián Garcés, Vasco de Quiroga, Bartolomé de Las Casas, fray Antonio de Valdivieso, fray Pedro de Gante, Juan de Zumárraga y otros, además de estudiosos como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y otros profesores de la Escuela de Salamanca o escuela española de derecho internacional.

¹⁵ *Cfr. Declaración por la liberación del indígena*, comúnmente conocida como *Declaración de Barbados I* (1971). <https://iela.ufsc.br/primera-declaracion-de-barbados-por-la-liberacion-del-indigena/> [consultado el 19/11/2024].

¹⁶ FRANCISCO, *Carta*, octubre 2021; ID., *Audiencia general*, 23/08/2023. Véase el video de dicha Audiencia, con un discurso espontáneo y más extenso que el texto oficial que aparece en la *web* del Vaticano.

https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/Audiencia-Papa-francisco-inculturacion-evangelio-guadalupe-ucrania-paciencia-conflictos_0_2590240954.html [consultado el 20/11/2024].

¹⁷ Santa Sede, Dicasterios para la Cultura y la Evangelización y el Servicio para el desarrollo humano integral, *Nota conjunta sobre la 'doctrina del descubrimiento'*, 30/03/2023. <https://www.humandevlopment.va/es/news/2023/nota-congiunta-sulla-dottrina-della-scoperta.html> [consultado el 20/11/2024].

cepto de la soberanía nacional, las declaraciones de derechos, la división de poderes, el principio de legalidad, el racionalismo filosófico, el liberalismo político, la libertad de conciencia, la democracia, la neutralidad ante las doctrinas religiosas y la separación de las organizaciones religiosas, la tolerancia religiosa, la igualdad y no discriminación, el respeto a las minorías, el ideal republicano, la moral pública y la ética cívica, que conformarían la modernidad y que permitirían a los Estados modernos reformar las Administraciones y crear nuevas instituciones públicas. En España y en sus colonias, en plena invasión napoleónica, se formaron Juntas de gobierno que lucharon por restablecer la monarquía española, rechazando a los franceses y afrancesados que querían desvincular la religión de la monarquía y del Estado.

El cura Miguel Hidalgo arengó el 16 de septiembre de 1810 a sus feligreses el llamado *Grito de Dolores*¹⁸ y todos ellos marcharon hacia la capital, donde las autoridades frustraron el levantamiento en enero de 1811 y asesinaron a los incitadores Hidalgo, Allende y Aldama. Entre 1811-1815, otros dos sacerdotes, José María Morelos y Mariano Matamoros, lideraron una insurrección más organizada, que igualmente fracasó, siendo fusilados. En estos protolevantamientos independentistas hubo un número considerable de clérigos involucrados¹⁹. Mientras tanto, en España triunfó en 1820 el pronunciamiento liberal de Rafael Riego, con el apoyo de tropas acantonadas para ir a América. Fernando VII tuvo que jurar la Constitución de 1812 y se estableció un trienio liberal que no cuajó en Nueva España, donde el último Virrey, Ruiz de Apodaca, asumió excepcionalmente la suprema jefatura política para gobernar, sin depender de España, mediante las *Leyes de Indias*, mientras el Rey estuviese impedido. En paralelo crecía el descontento y aumentaban los brotes secesio-

¹⁸ «¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!». Las palabras exactas no coinciden en las fuentes más antiguas, añadiendo algunas fuentes un «¡muerte a los gachupines!», con los que Hidalgo parece referirse, despectivamente, a los españoles afrancesados que habían entregado el poder de España y de América a los Bonaparte.

¹⁹ 14 de los 21 diputados que representaron al Virreinato de Nueva España en las Cortes de Cádiz eran eclesiásticos. El Partido americano, con apoyo del Virrey, de los criollos y del Ayuntamiento, pidieron que continuase provisionalmente el gobierno virreinal; mientras que el Partido peninsular, con la Audiencia, el arzobispo, los hacendados y comerciantes de la capital de México, apoyaron el nuevo régimen de España impuesto por Napoleón. Entre los primeros insurgentes, además de los clérigos mencionados, Servando Teresa de Mier, José María Cos, José María Alcalá y Orozco y Matías de Monteagudo, entre otros. *Cfr.* DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, «El clero y la Independencia mexicana. Reflexiones para su estudio», *Anuario de Historia de la Iglesia* 14 (2005), pp. 379-384; GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia, *Los obispos y el clero en el proceso de independencia, 1810-1821*, en GÁLVEZ, Manuel Andreu, RUIZ VELASCO BARBA, Rodrigo (coords.), *La forja de México: a doscientos años del surgimiento de una nación política*, UNAM, México, pp. 343-399. Hidalgo y Morelos fueron excomulgados, en penas canónicas cuestionadas desde el revisionismo actual.

nistas. Una imprevisible alianza, en febrero de 1821, entre Agustín de Iturbide, oficial del ejército español, y Vicente Guerrero, líder de los insurgentes, fue la estocada definitiva que posibilitó la Independencia, acordando ambos que el nuevo régimen defendería la religión católica –manteniendo sus privilegios y fueros, sin tolerar ninguna otra religión–, y que en el seno del nuevo México tendrían cabida todos. Este Acuerdo permitió al Ejército Trigarante entrar en la capital en septiembre de 2021, logrando así la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos.

México asumió una confesionalidad católica²⁰ que tomó de la Constitución gaditana: después de invocar a la divinidad, el art. 1.3 de la primera Constitución mexicana, la federal de 1824 –que estuvo en vigor durante 4 décadas–, reprodujo el art. 12 de la Constitución española de 1812, con excepción del acto de fe en la veracidad de la Iglesia católica²¹. En México se sucedieron años de inestabilidad política²² y social²³ y aunque el pueblo permaneció católico, fue arraigando una élite política acatólica, anticlerical, liberal y masona, que acabaría enfrentándose con la jerarquía católica mexicana y con la Santa Sede por razón del patronato real²⁴, que México creía haber heredado de la monarquía española y que la Santa Sede no le reconoció, alegando que las autoridades mexicanas se entrometían en asuntos eclesiales.

En 1833 el Presidente liberal Gómez Farías promulgó Leyes²⁵ que pretendían controlar la Iglesia católica. La reacción fue la sublevación conservadora

²⁰ En los elementos constitucionales de Rayón (1812), en la Constitución de Apatzingán (1814) y en el Plan de Iguala (1821).

²¹ «Decreto de 4 de octubre de 1824. Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos. En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad... Constitución... 3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege (*sic.*) por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra».

²² Hubo dos Imperios (con Agustín I de Iturbide, 1822-1823; y con Maximiliano de Habsburgo, 1864-1867), Repúblicas federales (1824-1836; 1846-1853; 1857-1862) y una República centralista entre 1853-1857.

²³ Por la polarización entre conservadores y liberales y entre centralistas y federalistas y, más adelante, por las guerras secesionistas en gran parte del territorio mexicano.

²⁴ Entre 1810 y 1821 hubo muchos oficios eclesiásticos vacantes, como consecuencia de la guerra y del sistema del patronato regio. Tanto Iturbide como algunos obispos mexicanos quisieron que los mismos Obispos mexicanos provisionaran los oficios vacantes, por derecho devolutivo. *Cfr.* MARTÍNEZ DE CODES, Rosa María, «La regulación estatal del factor religioso en el siglo XIX, en México: el ocaso del Patronato», en DE LA PUENTE BRUNKE, José, GUEVARA GIL, Jorge Armando, *Derecho, instituciones y procesos históricos*, vol. 3, PUCP, Lima, 2008, pp. 355-372; *idem.*, «Del sistema patronal al régimen constitucional de 1824 en México. Pervivencias y cambios en la cuestión religiosa», en GONZÁLEZ VALES, Luis E., *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: actas y estudios*, vol. 2, Academia Puertorriqueña de Historia, San Juan, 2003, 659-684.

²⁵ Intentó quitar a la Iglesia católica el monopolio educativo, secularizó las misiones de California, los hospicios, las fincas rústicas y urbanas, suspendió la Real y Pontificia Universidad y la

de mayo de 1834 al grito de «¡Religión y fueros!». Las Constituciones centralistas de 1836 y de 1843 declaraban que el país profesaba y protegía la religión católica. Por fin, en 1836, la Santa Sede aceptó la Independencia de México. Nuevos Presidentes de corte liberal –como Álvarez Hurtado, en 1855, e Ignacio Comonfort, gobernante entre 1855 y 1858–, promulgaron nuevas Leyes de Reforma, cuyo máximo exponente fue la Ley Lerdo, de 1856, que desamortizó los bienes de manos muertas de la Iglesia católica²⁶.

El Congreso Constituyente de 1856 debatió acerca de la tolerancia religiosa, aunque la Constitución de 1857 –liberal, aunque moderada–, no llegó a garantizar la libertad religiosa en cuanto tal, pero tampoco explicitó privilegios de la Iglesia católica²⁷. No la aceptaron ni la jerarquía católica ni los conservadores católicos ni los liberales anticlericales, quienes acabaron enfrentándose en una guerra civil –la Guerra de reforma o de los tres años–, que concluyó, en enero de 1861, con el triunfo de los liberales que lideraba Benito Juárez, quien acabó gobernando el país entre 1858 y 1872 y tuvo que hacer frente a desafíos internos y externos de envergadura, entre ellos a la invasión de la Alianza tripartita formada por Inglaterra, Francia y España.

Bajo el mandato del Presidente Juárez se aprobaron, entre 1859 y 1863²⁸, nuevas Leyes de Reforma que culminaron con las Leyes de Libertad de Cultos (1860) y de Instrucción pública (1867). Juárez aspiró a una reforma integral que transformara y modernizara el Estado y su Administración, en paralelo con lo que venía sucediendo en otros países de Europa. Respecto a la relación del Gobierno con las organizaciones religiosas, México cortó definitivamente los

obligación civil de pagar diezmos y derogó las leyes que daban validez civil a los votos religiosos y monásticos.

²⁶ Desamortización que extendió a las tierras comunales de los pueblos indígenas, los cuales –a pesar de ser propietarios y poseedores inmemoriales–, no pudieron defenderse por cuanto tampoco gozaban de personalidad jurídica.

²⁷ En la práctica, terminó con algunos privilegios de los eclesiásticos –entre ellos el fuero y la adquisición y administración de bienes raíces–, iniciando el proceso secularizador del país. Cfr. SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, «La libertad religiosa y la Constitución de 1857», en ID. (coord.), *Derechos y libertades entre cartas magnas y océanos: experiencias constitucionales en México y España (1808-2018)*, UNAM, México, 2021, 157-185.

²⁸ Las Leyes de Reforma fueron un conjunto de *Decretos* promulgados entre 1859 y 1863 para separar el Estado de la Iglesia católica. En 1859 se nacionalizaron los bienes eclesiásticos y se suprimieron los órdenes religiosos masculinos (12 de julio), se aprobó el matrimonio civil (23 de julio), se creó el Registro Civil (28 de julio), se secularizaron los cementerios (31 de julio) y se suprimieron los días festivos y la asistencia del Gobierno a celebraciones religiosas (11 de agosto). En 1860 se reconoció la libertad de cultos (4 de diciembre). El 26 de febrero de 1863 se suprimieron todas las comunidades religiosas. Maximiliano –Emperador entre 1864-1867–, se mantuvo favorable a la libertad de cultos y a la secularización.

lazos con la Santa Sede²⁹ y favoreció la llegada de misioneros cristianos que se introdujeron en ambientes liberales e ilustrados. A mediados del siglo XIX éstos llegaron a título personal y sin apoyo institucional y poco después algunas Iglesias –como la bautista, la presbiteriana y la Sociedad Bíblica Americana–, ya enviaron misioneros de forma organizada.

Lerdo de Tejada –a la sazón nuevo Presidente, de 1872 a 1876–, incorporó las Leyes de Reforma a la Constitución progresista de 1873. Le sucedieron Presidentes autoritarios, entre los que destaca la prolongada presidencia de Porfirio Díaz (1876-1880 y 1884-1910), quien mantuvo formalmente las reformas liberales de sus antecesores, pero acabó haciendo una política más acomodaticia con la realidad religiosa mexicana, que incluyó la colaboración con la jerarquía de la Iglesia católica. Aunque sea un reduccionismo, en la actualidad los mexicanos se dividen entre juaristas-progresistas y porfiristas-conservadores.

En 1910 se inició la revolución mexicana que, en algunos lugares y períodos, fue antirreligiosa y, especialmente, anticlerical, sobre todo en el Norte del país. Sus momentos estelares fueron la Ley Agraria de 1915 y la Constitución de Venustiano Carranza de 1917, la cual, en su art. 24, garantizaba la libertad de creencias y de culto y, en su art. 130, separaba el Estado de las iglesias y mantenía la supremacía del primero sobre las corporaciones religiosas, que no fueron reconocidas como sujetos de derecho público. De alguna forma, esta Constitución pretendió hacer *tabula rasa* en el tema religioso, suprimiendo la relevancia pública del clero católico y favoreciendo la igualdad entre las religiones.

González Schmal resume el ambiente anticlerical de la época, señalando que

«como se desprende de los debates del Constituyente de Querétaro respecto a la materia religiosa en general, y el laicismo, en particular, no es fácil reducir esta última expresión a un concepto unívoco, porque se le atribuyeron diversos contenidos, a veces contradictorios entre sí. Lo mismo se consideró que el laicismo implicaba simplemente una actitud neutral frente a la religión, que se le estimó como un instrumento para extirpar el sentimiento religioso. El denominador de todos los constituyentes –aparentemente sin

²⁹ En todo el siglo XIX sólo hubo dos delegados pontificios, Luigi Clementi (1851-1861) y Pier Francesco Meglia (1864-1866). *Cfr. Nunciature to Mexico*, <https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dxxmx.html> [consultado el 24/11/2024]. A partir de 1904 se nombraron delegados pontificios. Desde finales de los 80 dichos delegados pontificios actuaron como representantes personales del Papa ante el Presidente de México. En 1992 se establecieron relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.

una sola excepción–, fue el de un enardecido anticlericalismo, que fue asociado a la lucha, en unos casos, contra el clero, en otros contra la Iglesia católica y, en otros más, contra la religión misma»³⁰.

En los siguientes años hubo un desarrollo reglamentario del art. 130 para apuntalar la normativa anticlerical³¹ y nuevos levantamientos de militares conservadores o liberales que fracasaron o dieron paso a gobiernos efímeros. Las tensiones con la Santa Sede se extremaron. Así, en 1923 y 1926 el Gobierno expulsó, respectivamente, los delegados apostólicos Ernesto Filippi y Jorge José Caruana y, en 1924, prohibió los actos del Congreso eucarístico nacional.

En 1925 el gobierno de Elías Calles promulgó una Ley de tolerancia de cultos, que pretendía controlar y limitar el culto católico³². Los católicos más tradicionales reaccionaron con la creación de la Liga nacional para la defensa de la libertad religiosa y se sublevaron en una guerra entre grupos de católicos y el Gobierno –al que apoyaron los evangélicos–, la Cristiada, que duró tres años (1926-1929), en la que murieron 70.000 mexicanos y hubo 200.000 desplazados. La Guerra de los Cristeros concluyó con un Pacto de *modus vivendi* entre Portes Gil y los obispos mexicanos, el cual no fue aceptado ni por la Liga ni por el segmento más intransigente de los católicos. Los Presidentes del período del Maximato consolidaron un país laico y secular, manteniendo los enfrentamientos con la Iglesia católica y con los católicos más conservadores.

Entre mediados del XIX y mediados del XX hubo varios intentos de crear una Iglesia católica mexicana desligada de Roma³³, algunos de los cuales contaron con el beneplácito gubernamental, que trataba así de debilitar el catolicismo romano. El caso más relevante fue el de Joaquín Pérez Budar, personaje que tuvo una vida trepidante, quien, con el apoyo tácito del obispo liberal y antigadalupano Eduardo Sánchez Camacho y con el apoyo expreso del Gobierno

³⁰ GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, «El significado del laicismo en el constituyente de 1917», en VALADÉS, Diego, CARBONELL, Miguel (coords.), *El proceso constituyente mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917*, UNAM, México, 2007, pp. 526-527.

³¹ Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa, de 02/07/1926; Ley reglamentaria del art. 130 de la Constitución Federal, de 18/01/1927; Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, de 26/05/1928 y Ley Reglamentaria del 7.º párr. del art. 130 de la CPEUM, de 30/12/1931.

³² Calles estableció un Registro de sacerdotes, que habilitaba para ejercer como tales; clausuró templos, cerró conventos y expulsó a los sacerdotes extranjeros del país.

³³ Como precedentes, la rebelión religiosa de Cancun (1712-1713); en 1856, el intento de Rafael Díaz Martínez; entre 1859-1861, un grupo de sacerdotes nacionalistas, liberales y constitucionales intentaron constituir una Iglesia nacional, que fracasó ante las amenazas de excomunión; en 1864 la parroquia de Jesús se hizo protestante. Cfr. ZALPA RAMÍREZ, Genaro, *Enciclopedia de las religiones en México*, UAA, 2015, p. 66. https://editorial.uaa.mx/docs/enciclopedia_religiones_mexico.pdf [consultado el 20/01/2025].

y de otros católicos –como López Sierra y el español Luis Manuel Monge–, fundó en 1925 una Iglesia nacional que pretendía concluir la Independencia mexicana, completando la expulsión de antaño de los españoles con la de clérigos al servicio de una Iglesia extranjera. Sus sucesores elevaron en 1933 a José Eduardo Dávila Garza al Papado con el nombre de Eduardo I³⁴.

Por su parte, diferentes denominaciones protestantes y evangélicas fueron estableciéndose espaciadamente en México desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX³⁵, arraigando a finales de siglo y llegando a tener en el siglo XXI un porcentaje cualificado de feligreses, principalmente en el Sur del país, en entornos indígenas.

En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, que el general Lázaro Cárdenas transformó, en 1938, en el Partido de la Revolución Mexicana y, finalmente, en 1946, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que heredó y continuó la Revolución y gobernó en la Federación hasta el año 2000. En 1937 nació la Unión Nacional Sinarquista, movimiento norteamericano cercano al falangismo español, que evolucionó hacia un catolicismo conservador. En 1939 se fundó el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), con influencia del empresariado católico mexicano. El estadista Lázaro Cárdenas cohesionó y desarrolló el país, gobernándolo entre 1934 y 1940 y posicionándolo a nivel internacional, sin sucumbir, en sus nacionalizaciones, ni ante los intereses norteamericanos ni ante los magnates de los sectores ferroviario y petrolífero; fue tolerante en lo religioso y estableció una educación gratuita, laica y obligatoria.

3. EL PROGRESIVO ACERCAMIENTO ENTRE EL ESTADO Y LAS RELIGIONES

Entre 1940 y 1970 el país empezó a liberalizarse y creció la iniciativa de las empresas privadas. El general priista Manuel Ávila Camacho, gobernante entre 1940-1946, se declaró católico y revirtió algunas medidas anteriores en

³⁴ En la actualidad esta Iglesia está inscrita como asociación religiosa en la DGAR. En 1972 la Iglesia ortodoxa católica apostólica mexicana se incorporó al Exarcado ortodoxo de México y, en 1983, se fusionaron la Iglesia ortodoxa católica apostólica mexicana con la Iglesia católica antigua.

³⁵ Inicialmente, presbiterianos y luteranos; evangélicos congregacionistas –como los bautistas (1864) y los metodistas (1873)–; iglesias vinculadas al movimiento de la santidad, como la Iglesia del Nazareno; mormones (1875), adventistas (1891), testigos de Jehová (1893) y la Iglesia de Dios (1922), entre otros. El Instituto Lingüístico de Verano desempeñó, a partir de los años 30, un papel prevalente en las comunidades indígenas –al traducir la Biblia a sus idiomas–, pero a la vez controvertido, por sus vinculaciones con la Banca y con el servicio secreto norteamericano.

política agraria y religiosa, favoreciendo a los latifundistas y a la Iglesia y permitiendo la apertura de escuelas católicas en detrimento del sistema socialista de Cárdenas. Los siguientes sexenios presidenciales, con algunos retrocesos proteccionistas, se encaminaron hacia un neoliberalismo tecnocrático en el que el estamento militar tuvo una presencia residual, aunque el priismo siguió copando las Administraciones federal y estatales hasta finales de siglo.

México mantenía un clero y un episcopado conservadores, aunque en la década de los 70 empezaron signos aperturistas de la mano de obispos como Méndez Arceo en Cuernavaca, Miranda Gómez en Tulancingo, Sánchez Tinoco en Papantla y Ruiz García en Chiapas. El *aggiornamento* del Concilio Vaticano II (1962-1965) lo impulsaron tanto Pablo VI –con la Enc. *Populorum progressio* (1967)–, el CELAM –con las Conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979)–, y nuevos obispos mexicanos que implementaron pastorales progresistas en diócesis de la región norte (Alberto Almeida en Chihuahua, Manuel Talamás en Ciudad Juárez y José Alberto Llaguno en la Tarahumara) y de la región Pacífico sur, a saber, el ya mencionado Samuel Ruiz en San Cristóbal (Chiapas), Juvenal Porcayo en Tapachula (Chiapas), Bartolomé Carrasco en Oaxaca, Arturo Lona en Tehuantepec (Oaxaca), Hermenegildo Ramírez (Huatla) y Serafín Vázquez en Ciudad Guzmán.

En febrero de 1974 el Presidente Echeverría visitó al papa Pablo VI en el Vaticano, iniciando un giro copernicano en la gestión de la política religiosa del Gobierno. Bajo la presidencia de José López Portillo (1976-1982) y en plena crisis petrolera, el Papa Juan Pablo II realizó su primer viaje a México, en 1979, del total de cinco ocasiones que visitaría el país, consolidando así el nuevo entendimiento³⁶. A partir de 1982 se reactivaron políticas neoliberales que, de alguna forma, vaciaron de contenido los logros sociales de los períodos revolucionario y post-revolucionario. En 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de tendencia socialdemócrata. Entre 1993-1994 murieron asesinados el cardenal Posadas, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el secretario general del PRI, Ruiz Massieu.

³⁶ Sobre la trascendencia de este viaje, Masferrer considera que «marcó el derrumbe definitivo del orden legal y político configurado en la post-Cristiada. Éste se debió a un ingrediente no calculado por el Gobierno Mexicano, la afluencia masiva de ciudadanos, que se calcula en más de 20 millones de personas –en un país que en esos momentos tenía alrededor de 80 millones de habitantes– que aclamaron al Papa... la historia de México es la historia de un conjunto de transformaciones donde las masas marcan y definen el cambio. Fueron esas multitudes quienes derogaron las reglas constitucionales... podemos decir que entre 1976 y 1992 transcurrió una suerte de limbo o purgatorio legal donde *se sabía que la letra escrita ya no regía* y se presumía que *algo vendría*». MASFERRER KAN, Elio, *Religión, poder y cultura. Ensayos sobre la política y la diversidad de creencias*, Araucaria, México, 2009, p. 89.

1992 fue un año fetiche en el que se celebró el V Centenario del descubrimiento de América, de la evangelización del Continente, del encuentro entre dos mundos o dos civilizaciones o los 500 años del genocidio, rebelión y resistencia indígenas, según diferentes colectivos. Ese año, con la aprobación de la LARCP³⁷, hubo un punto de inflexión en las relaciones Iglesia-Estado, tanto con la reanudación de relaciones diplomáticas con la Santa Sede como con el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica, a la que el Gobierno le otorgó –igual que a las demás religiones inscritas en el Registro correspondiente–, personalidad jurídica. El nuevo nuncio, Girolamo Prigione, promovió nombramientos episcopales conservadores –en los que primaba lo curial, la pastoral de comunión y la referencia a los nuevos movimientos eclesiales–, como los de Juan Jesús Posadas y Juan Sandoval Íñiguez, quienes sucedieron, respectivamente, a los mencionados Méndez Arceo y Manuel Talamás.

La desaceleración económica provocada por las crisis de los 70 escoró aún más la política neoliberal, que tuvo su culmen en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que posicionó a México como socio comercial fundamental para los EE.UU. y Canadá. El 1 de enero de 1994, fecha de su entrada en vigor, estalló en Chiapas el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que visibilizó las reivindicaciones indígenas. Por primera vez, el PAN alcanzó la presidencia de la nación en el año 2000, en la persona de Vicente Fox. Con el cambio de milenio se inició en México un cambio de paradigma en busca de un nuevo proyecto nacional que integrase a los agentes sociales, entre los que estaban los indígenas y las religiones. Juan Luis Hernández interpreta el renacer de las religiones como una disputa de liderazgo de la autoridad que dirimirá el orden social, «de esta forma, la Iglesia asumió un liderazgo único en la

³⁷ La LARCP se reformó y adicionó el 24/04/2006, el 19/08/2010, el 25/05/2011 y el 17/12/2015. El Presidente Vicente Fox expidió su RLARCP el 6/11/2003, cuya última reforma es de 28/09/2012. Un análisis de la Ley, en LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, José Luis, cit., pp. 230-240; SOUTO GALVÁN, Beatriz, «Asociaciones religiosas en México», *Laicidad y libertades: escritos jurídicos*, 0 (2000), pp. 333-347. A la luz de la LARCP en México existen meros «grupos religiosos» *de facto*, porque no quieren o no pueden constituirse en asociaciones religiosas o porque la Ley los excluye (art. 8, V LARCP); cuando un grupo religioso notifica a la DGAR su voluntad de llegar a convertirse en una asociación pasa a denominarse «agrupación religiosa» a la espera del cumplimiento de los requisitos del art. 7 LARCP y, cuando los cumplen, pueden incoar ante la DGAR su Solicitud de registro constitutivo, con cuya inscripción registral pasan a ser «asociaciones religiosas», gozando entonces de los derechos del art. 9, IV-VII LARCP y demás disposiciones aplicables. El INEGI, en su *Clasificación de religiones 2020*, distingue entre «credos religiosos», subdivididos en «grupos religiosos» y éstos en «denominaciones religiosas».

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197261.pdf [consultado el 10/01/2025]. La legislación mexicana no utiliza las categorías de confesión, comunidad, federación u organización religiosa, tan frecuentes en otros países de habla hispana.

sociedad civil, siempre mirando a la sociedad política e influyendo en ella. Desde la sociedad civil, la Iglesia mexicana coincidió con el Estado, se confrontó con él y le disputó el poder ideológico»³⁸. La ambigüedad de este rearme eclesial es el que ha levantado suspicacias entre los puristas de la laicidad, que ven peligrar los tres grandes logros históricos de la laicidad: la libertad de conciencia, religiosa y de culto; la autonomía del aparato del Estado desde la neutralidad y la separación y, finalmente, la igualdad y no discriminación desde una ética cívica común.

San Cristóbal de las Casas –ciudad chiapaneca donde empezó la revuelta zapatista–, fue un laboratorio de ideas desde los años 70. Al frente de esa diócesis católica estuvo, entre 1960 y el año 2000, Samuel Ruiz, carismático obispo católico que favoreció la opción preferencial por los pobres, la teología india y de la liberación, una pastoral social e indígena con una presencia activa de diáconos permanentes, agentes de pastoral y catequistas y de sus esposas y una liturgia inculturada que fuese significativa para los indígenas de su diócesis. Convocó el III Sínodo diocesano que propuso una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía del Espíritu. La percepción que tenía de su Iglesia particular –más sinodal y popular–, chocó con la visión –más jerárquica y tradicional–, del Papa Juan Pablo II y, en un contexto de rearme del conservadurismo católico mexicano de aquellos años –cuya versión más extrema fue el Yunque–, la mayor parte del episcopado mexicano y de la Curia romana tampoco comprendieron su eclesiología visionaria. Por el contrario, los líderes del EZLN –que tenían en sus filas a militantes que provenían de movimientos católicos de base–, quisieron que Samuel Ruiz mediara entre su grupo guerrillero y el Gobierno, a pesar de que el obispo siempre se opuso a que los católicos optaran por la vía armada. Su sucesor, Felipe Arizmendi, manteniendo las mismas prioridades, supo tender puentes con Roma y ampliar su pastoral a nuevos agentes diocesanos. En la actualidad, San Cristóbal de las Casas en un conglomerado de religiones³⁹, lo que ha dado lugar a conflictos religiosos, pero también a un diálogo ecuménico e interreligioso entre los actores que lideran las asociaciones religiosas.

³⁸ HERNÁNDEZ AVENDAÑO, Juan Luis, *Dios y el César: itinerario político de la Iglesia*, PyV, México, 2006, p. 111.

³⁹ En el *Censo de población de 2020*, 2.985.644 chiapanecos se declararon católicos; 1.795.861, protestantes o cristianos evangélicos; 477, judíos; 365, musulmanes; 248, de origen oriental; 11.427, de raíces étnicas; 189, de raíces afro; 345, espiritualistas; 2.378, de otras religiones; 695.496, sin religión; 17.966, creyentes sin adscripción religiosa y 33.432, no especificaron. Cfr: INEGI, *Panorama de las religiones en México*. 2020, 61. En 1895 el 99.3% de los chiapanecos era católico y en el 2020 son el 53.9%; en el 2010 los evangélicos eran el 19.2% y en el *Censo del 2020* son el 32.4%.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463910404.pdf [consultado el 09/12/2024].

4. EL RECONOCIMIENTO DE LA LAICIDAD EN UN ENTORNO RELIGIOSAMENTE PLURAL

El nuevo siglo XXI se inició con la reforma constitucional del 2001. La laicidad seguía sin estar formalmente reconocida en ningún texto normativo, aunque estaba materialmente implícita en muchas leyes que se fueron promulgando desde mediados del siglo XIX. Los primeros textos que incorporaron formalmente la laicidad fueron el art. 3 de la LARCP (15 de julio de 1992)⁴⁰ y el art. 32 de su Reglamento (RLARCP, 6 de noviembre 2006)⁴¹. Aun así, la laicidad no tuvo rango constitucional hasta las reformas de la CPEUM de 2013 al art. 24⁴², de 2012 al art. 40⁴³ y de 2014 del art. 115⁴⁴ que han establecido que la República mexicana es laica,

⁴⁰ «El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros [párr. reformado el 19/08/2010]. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa» (art. 3 LARCP) [párr. adicionado el 19/08/2010].

⁴¹ «[Las autoridades]... en sus relaciones con las asociaciones religiosas... observarán el principio de separación del Estado y las Iglesias, el carácter laico del Estado mexicano y la igualdad ante la ley... [promoviendo] un clima propicio para la coexistencia pacífica entre individuos y grupos de las distintas religiones y credos con presencia en el país, especialmente el fomento del diálogo y la convivencia interreligiosa» (art. 32 RLARCP). La última reforma es del 28/09/2012.

⁴² «Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política [párr. reformado el 19/07/2013]. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria [párr. reformado el 28/01/1992]» (art. 24 CPEUM).

⁴³ «Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal» [art. reformado el 30/11/2012; 29/01/2016] (art. 40 CPEUM). *Cfr.* BLANCARTE, Roberto, «Las razones para incluir la laicidad del Estado en la Constitución mexicana», en CONDE RODRÍGUEZ, Elsa, TAGLE MARTÍNEZ, Martha, ORTÍZ MAGALLÓN, Rosario, BLANCARTE, Roberto J. (coords.), *Estado laico, democracia y libertades*, Cámara de diputados, México, s.a., pp. 15-30.

<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6021-estado-laico-democracia-y-libertades-coleccion-camara-de-diputados> [consultado el 03/01/2025]. Con otra argumentación, SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, «La reforma al artículo 40 constitucional de 2012», en CARBONELL, Miguel, FIX FIERRO, Héctor, GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl, VALADÉS, Diego (coords.), *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Estado constitucional*, tomo IV/vol. 2, IJ, México, 2015, pp. 733-748.

⁴⁴ «Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes» [art. reformado el 10/02/2014].

convirtiendo así la laicidad en un principio que informa al resto del ordenamiento jurídico.

México ha evolucionado enormemente en los últimos decenios y la sociedad civil se ha organizado con propuestas novedosas para regenerar democráticamente el país. En ocasiones, estos comportamientos cívicos han derivado en compromisos políticos, como la creación del centrozquierdista Partido Verde Ecologista de México (1986), del izquierdista Partido del Trabajo (1990), del socialdemócrata Movimiento Ciudadano (MC, 1997) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), creado éste último en 2011 y que, desde el 2018, en coalición con otros partidos políticos, ha alcanzado la presidencia de la Federación, durante el sexenio 2018-2024, con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, en la actualidad, con Claudia Sheinbaum, cuyo proyecto del llamado «segundo piso de la Cuarta Transformación (4T)» está queriendo consolidar cambios estructurales en el país. En este contexto, la pobreza generada por las nuevas recesiones económicas y el aumento exponencial del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico han convertido a México en un país con altos índices de inseguridad y corrupción. A partir del 2006 el zapatismo adoptó, en los territorios chiapanecos que controlaba, formas cívicas y políticas de comunitarismo.

Los Papas Benedicto XVI y Francisco viajaron a México en 2012 y 2016, respectivamente. Francisco ha marcado un nuevo estilo eclesial, en México, con nombramientos episcopales y cardenalcios (Obeso Rivera, Suárez Inda, Aguiar Retes y Arizmendi Esquivel) acordes con su visión de Iglesia –más sinodal e inclusiva–, y del mundo –más fraternal y comprometido con el cuidado de la casa común–. Papas y obispos han puesto en valor la relevancia, en el catolicismo mexicano, de la religiosidad popular –que es producto del mestizaje–, y cuyos máximos exponentes se dan en el guadalupismo mariano –la diosa Tonantzin azteca–; en peregrinajes que, con ocasión de las fiestas patronales, recorren centros ceremoniales prehispánicos y, finalmente, en otras devociones populares vinculadas con la muerte y el Día de muertos, la Navidad y la Semana Santa, principalmente⁴⁵.

⁴⁵ Con un muestreo de 3.000 entrevistas, en Encuesta realizada en el 2016, un 50.9% de los encuestados peregrinaba a santuarios; un 12% se hacía «limpias» con yerberos, curanderos, brujos, santeros, espiritistas o chamanes; un 6.6% se cargaba de energía durante el equinoccio en lugares indígenas –como la danza o los baños en temazcales–; un 54.8% tenía altares religiosos en sus domicilios (el 59.4% lo tenía dedicado a la Virgen de Guadalupe y el 8.3% a otras Vírgenes; un 18.2% a Cristo; un 1.3% al santo patrón de la parroquia o municipio; un 1% a santos populares no católicos y un 0.3% a la Santa Muerte); un 96.2% cree que Dios existe, un 79.8% cree en la existencia de la Virgen de Guadalupe; un 24.6% cree en fantasmas, aparecidos o espíritus chocarreros; un 52.8% cree en el diablo y un 74.6% está de acuerdo con que haya celebración de altares de

Durante la primera mitad del siglo xx se crearon –sin resultados visibles–, el Concilio Nacional Evangélico y la Convención Nacional Evangélica, que estuvieron operativas hasta los años 80. Durante la segunda mitad del siglo xx y con mayor intensidad a finales de siglo, arraigaron en México Iglesias procedentes del pentecostalismo (como las Asambleas de Dios –que ya estaban presentes desde 1906– y, en menor medida, la Iglesia del Evangelio completo, la Iglesia apostólica, la Fraternidad de Iglesias, las Iglesias de Dios y un grupo autóctono y controvertido, La Luz del mundo) y el movimiento carismático neopentecostalista. A finales de siglo, Confraternice –dirigida por Arturo Farela Gutiérrez–, y el Foro Nacional de Iglesias Cristianas evangélicas –de Alberto Montalvo–, pugnaron entre sí por ostentar la representatividad de los evangélicos ante el Gobierno. Salinas de Gortari percibió el potencial religioso, social, moral y político que tenían los evangélicos y los incorporó como interlocutores religiosos, como harían los presidentes que le sucedieron –en ocasiones, ralentizándolo, como Zedillo, o acelerándolo, como López Obrador⁴⁶–. Desde entonces, durante el siglo xxi, la visibilidad social –e incluso política–, de los evangélicos y, en general, de los grupos religiosos –incluido el católico–, ha ido creciendo en muchas esferas del espacio público.

La oferta religiosa, espiritual y de las cosmovisiones se ha diversificado a finales del siglo xx. El catolicismo sigue siendo mayoritario aunque, en su interior, tenga sensibilidades muy diversas entre sí; los grupos cristianos, protestantes, evangélicos, (neo)pentecostales y (neo)carismáticos son cada vez más numerosos; hay emergentes religiones orientales –islam, budismo–; grupos neoindianistas de exaltación nativista de la toltequidad o la mexicanidad –como

muerdos en las escuelas públicas. Cfr. ENCREER/REFREM, *Informe de resultados, Encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México, 2016*, SEGOB, México, 2021, pp. 38-43. <http://asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Varios/ENCREER.pdf> [consultado el 6/01/2025].

⁴⁶ Cfr. RUIZ GUERRA, Rubén, «Los evangélicos mexicanos y lo político», *Revista religiones y sociedad, Expediente: los evangelismos en México*, 3/mayo-ag. (1998), p. 85. En la toma de posesión de AMLO, el 01/12/2018, unos indígenas le hicieron una «limpia» y le entregaron el bastón de mando; entre el 31 de octubre y el 2/11/2020, con ocasión del Día de Muertos y para honrar a los fallecidos por el Covid, representantes de 20 pueblos indígenas realizaron ceremonias y ofrendas rituales tradicionales en el Patio del Palacio Nacional. Tanto AMLO –el 15/11/2023–, como los candidatos a la Presidencia en las elecciones de 2024, Álvarez Máynez (MC), Claudia Sheinbaum (Morena) y Xóchitl Gálvez (PAN) visitaron la sede de la Conferencia Episcopal Mexicana y éstas dos últimas fueron, a su vez, recibidas por el Papa Francisco en el Vaticano. AMLO tuvo una particular apertura hacia los evangélicos, especialmente al inicio de su mandato –facilitándoles la TV abierta, implicándoles en la difusión de la «Cartilla moral» de Alfonso Reyes y, con anterioridad, habiendo recibido la bendición de algunos de sus líderes (25/04/2012)–, aunque fue disminuyendo en el transcurso de su sexenio. Cfr. BARRANCO, Bernardo-BLANCARTE, Roberto, «AMLO y la religión. El Estado laico bajo amenaza», Grijalbo, Barcelona, 2019, p. 186.

In Kantonal– y, por último, derivaciones sincréticas de espiritualidad parareligiosa de la *new age*; además de ciudadanos sin adscripción religiosa o sin religión, que aumentan, de forma sostenida, en las estadísticas. En el último *Censo de población*, del 2020, el 77.7% de los mexicanos profesaba el catolicismo, un 11.2% era protestante o evangélico, un 0.2% pertenecía a otra religión, un 2.5% era creyente sin adscripción religiosa y un 8.1 % no tenía religión⁴⁷. La investidura de Donald Trump el 20 de enero de 2025 como nuevo Presidente de los EE.UU. suscita interrogantes acerca del impacto en México de sus políticas proteccionistas y migratorias y del control transfronterizo del narcotráfico.

5. LA DECONSTRUCCIÓN DE LA LAICIDAD

5.1 Una laicidad formal en una aconfesionalidad material

Los laicistas más puristas ven, en la reciente influencia de las religiones en el espacio público, la disolución de la laicidad «a la mexicana», el triunfo de un larvado neoconfesionalismo pragmático y un retroceso en las conquistas laicas y secularistas que México había logrado consolidar desde las leyes de

⁴⁷ INEGI, *Presentación de resultados*, Censo del 2020, 30.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf [consultado el 05/01/2025]. En los 14 Censos de población, realizados en México entre 1895 y 2020, se constata el descenso progresivo y continuado del catolicismo, el crecimiento sostenido de los evangélicos y el auge reciente de los no creyentes, además de otros parámetros menos significativos relativos a las minorías no cristianas, a los creyentes sin adscripción religiosa y a los nativistas.

«El censo de población de México [de 2020] nos brinda datos para reconocer los cambios y los nuevos patrones de composición religiosa en México. En primer lugar, cada diez años vemos que ya no somos tan católicos como lo éramos antes, pero la adscripción católica sigue siendo mayoritaria. En segundo lugar, se aprecia cómo van creciendo –lenta pero constantemente– las adscripciones a iglesias evangélicas –cristianas–, a la par que vemos cómo surgen nuevas iglesias en este ámbito que reclaman reconocimientos particulares; sea porque pertenecen a denominaciones autónomas, porque promueven distintas culturas doctrinales o litúrgicas, o porque los practicantes se autodefinen como «cristianos», «evangélicos» o «pentecostales». En tercer lugar, vemos cómo la secularización, entendida como la pérdida de relevancia de la religión, va avanzando de la mano del incremento de mexicanos no afiliados a ninguna religión; pero a la vez detectamos que estos no son mayoritariamente ateos, sino que son creyentes sin iglesia. Y en cuarto lugar apreciamos la emergencia de otras religiones: algunas que han estado presentes desde tiempos inmemoriales pero eran desconocidas por el censo (como raíces étnicas); otras, son nuevas presencias (como es el budismo, el islam, y otras de origen oriental); algunas que no están registradas como asociaciones religiosas porque no tienen esa estructura pero sí tienen seguidores y adherentes (como son las religiones de raíces afro y las espiritualidades New Age y esotéricas); algunas más que son cultos populares (por ejemplo los practicantes de la Santa Muerte y del Niño Fidencio) que están experimentando su autonomización del catolicismo popular, y otras su propio crecimiento (por ejemplo espiritualistas)». DE LA TORRE, Renée, GUTIÉRREZ, Cristina, «México, menos católico, más diverso y menos religioso que hace una década», *Nexos*, 29/03/2021. <https://www.nexos.com.mx/?p=54644> [consultado el 11/01/2025].

reforma de mediados del siglo XIX hasta las políticas públicas de los decenios posteriores a la revolución de 1910. Delgado-Molina afirma que

«es poco plausible pensar que la representatividad que declaran los líderes religiosos evangélicos se traduzca en la existencia de un “voto evangélico”... sin embargo, los evangélicos comparten disposiciones comunes que orientan su acción y que son relevantes en la vida pública... en este sentido, el riesgo es que subestimemos el fenómeno y la capacidad de las alianzas interreligiosas e interpolíticas para el impulso de ciertas agendas relacionadas con moral sexual y derechos, lo que a partir del pragmatismo político y religioso abre caminos hasta ahora vetados en México, que tendrán consecuencias a futuro. De ahí la importancia de defender el Estado laico como la estrategia para construir un régimen de convivencia que no se asiente en creencias religiosas y que garantice una sociedad que respete los derechos»⁴⁸.

Ésta sería una brecha por la que la laicidad, aun estando formalmente vigente, en la práctica no se aplicaría al haber caído en desuso algunas de las disposiciones por voluntad de los gobernantes. Se trataría de algunas disposiciones que limitan derechos a los ministros de culto y otras que restringen libertades a las religiones, fundamentalmente en materia electoral y de sufragio. *Sensu contrario*, hemos constatado que la presencia de las religiones es cada vez mayor en la esfera pública y, por otra parte, el Estado y las asociaciones religiosas convergen, con mayor asiduidad, en proyectos comunes.

¿No se estará produciendo una mutación normativa, en la que México sigue manteniendo formalmente la laicidad, pero que en la práctica se está transformando en un país materialmente aconfesional, en el que incluso se admite la colaboración con las religiones? Algunos autores tienen esta percepción, como veremos en otro apartado, y llaman a defender la laicidad tal como fue configurada y está regulada, frente al avance y protagonismo de las organizaciones religiosas.

⁴⁸ DELGADO-MOLINA, Cecilia A., «La «irrupción evangélica» en México. Entre las iglesias y la política», *Nueva sociedad*, 280/marzo-abril (2019). <https://nuso.org/articulo/la-irrupcion-evangelica-en-mexico/#footnote-18> [consultado el 10/01/2025]. Por entonces, Carmen Morán titulaba su columna periodística «La Iglesia en elecciones: «el laicismo más radical se ha ablandado»», y continuaba como entradilla «la separación Iglesia-Estado es uno de los emblemas de un país mayoritariamente católico, pero en los últimos años la religión ha ganado peso como actor político y granero de votos». MORÁN BREÑA, Carmen, «La Iglesia en elecciones...», *El País*, 16/03/2024. <https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2024-03-16/la-iglesia-en-elecciones-el-laicismo-mas-radical-se-ha-ablandado.html> [consultado el 03/01/2025].

5.2 Religiones y ministros de culto en el sistema electoral mexicano

El Derecho prohíbe la existencia de partidos políticos confesionales y regula minuciosamente las restricciones que tienen los ministros de culto en materia electoral y de sufragio (art. 130, párrafo 2, incisos d y e CPEUM y art. 14 LARCP). Las discrepancias y los delitos electorales se dirimen en Tribunales *ad hoc*, que son los Tribunales electorales de los Estados y de la Federación, cuyo máximo órgano es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aunque *a priori* pudiera parecer que las religiones tienen una visión de la vida y del mundo que concuerda mejor con partidos conservadores, la realidad es que los cristianos son un universo heterogéneo de grupos en los que ministros de algunas Iglesias católicas o evangélicas han apoyado, *de facto*, las políticas públicas promovidas por el PRI, el PAN, MC o Morena o han vetado, con disimulo, a partidos que consideraban contrarios a sus creencias o a su moral. Tampoco, entre los electores católicos o evangélicos, existe una concentración de voto por un partido concreto, aunque haya habido intentos de concentrarlos en algunos partidos políticos concretos de inspiración católica o evangélica, respectivamente⁴⁹, queriendo otorgar legitimación política a las meras creencias religiosas.

En las elecciones de 2018 el evangélico PES se coaligó con Morena y el PT en «Juntos haremos historia», obteniendo 30 diputados y 5 senadores⁵⁰—entre ellos, el ya mentado pastor pentecostal Arturo Farela Gutiérrez—, en una alianza que criticaron los evangélicos conservadores de Fonice, Ficemex y de otros grupos⁵¹. Entre los precandidatos independientes a la Presidencia de la República mexicana en las elecciones de junio de 2024 estaban Eduardo

⁴⁹ Entre los evangélicos, el Grupo Lerdo de Tejada (1992), el Frente de la reforma nacional (1995), el Partido Encuentro Social (PES, 2006) y Encuentro Solidario (ES, 2020).

⁵⁰ A pesar de obtener un considerable número de cargos públicos y de aportar 1.5M de votos a AMLO en las elecciones de 2018, paradójicamente el PES no obtuvo el 3% necesario para poder mantener el registro. *Cfr.* CORONA, Sonia, «Los evangélicos se aferran a López Obrador», *El País*, 12/07/2028.

https://elpais.com/internacional/2018/07/09/mexico/1531161540_362658.html?event_log=go [consultado el 22/12/2024].

⁵¹ «En el caso de las elecciones de 2018 en México, el papel de lo religioso y lo simbólico fue muy importante por la situación de crisis social, política y económica que atraviesa el país... la selección del candidato [AMLO] no se hizo sobre la base de coincidencias filosóficas, ideológicas ni políticas, sino partiendo de la credibilidad del personaje en términos de las “lealtades primordiales”, es decir, de los sistemas de valores culturales y religiosos, en un contexto de defensa del Estado laico y crítica de cualquier perspectiva confesionalista». MASFERRER KAN, Elio, *Lo religioso dentro de lo político. Las elecciones de México 2018*, Araucaria, México, 2018, pp. 108; 110.

Verástegui –católico cercano a Trump y a Steve Bannon, defensor de la familia tradicional, de la lucha contra el aborto y del rechazo a las políticas de género y demás propuestas de la Agenda 2030–, y Hugo Éric Flores –evangélico neopentecostal, fundador del *Encuentro Solidario*–, como opciones políticas disruptivas con el ejercicio tradicional de la política⁵².

Por otra parte, todos los líderes de los partidos políticos (Jorge Álvarez Máynez de MC, Claudia Sheinbaum de Morena y Xóchitl Gálvez del PAN) mantuvieron encuentros con las organizaciones religiosas más sobresalientes con la esperanza de recabar sus apoyos electorales⁵³ y, ciertamente, estos apoyos resultaron decisivos en el triunfo de Sheinbaum⁵⁴. Máynez no se manifestó sobre sus creencias, pero en sus declaraciones afirmaba creer en un Estado laico; Gálvez se ha declarado católica y Sheinbaum tiene ascendencia judía, pero ha afirmado no profesar ninguna religión.

En el marco del proceso electoral del 2024, aunque la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y la mayoría de los obispos católicos tomaron posturas equidistantes en el proceso electoral, los pronunciamientos particulares de algunos obispos y cardenales⁵⁵ y el mismo sentir popular de los votantes entendía que la jerarquía de la Iglesia católica, en su mayoría, se posicionaba por la candidata conservadora del PAN. En este nuevo escenario, en el que se debate acerca de la incidencia y protagonismo de las religiones en el espacio público, la CEM convocó a los tres candidatos en campaña para debatir acerca de 132 propuestas que les hicieron y que plasmaron en el Documento *Compromiso por*

⁵² Cfr. INE, *Candidaturas independientes 2024*. <https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/> [consultado el 03/01/2025].

⁵³ Durante los últimos años del mandato presidencial de AMLO algunos obispos católicos se posicionaron de forma crítica ante su Gobierno, principalmente a raíz del asesinato, el 20/06/2022, de 2 jesuitas en la sierra Tarahumara, del aumento de la corrupción y del crimen organizado, de la inseguridad ciudadana y religiosa y de algunas reformas concretas de la 4T, especialmente ante la prevista reforma integral del sistema judicial. Mientras que las invocaciones a Dios, las citas bíblicas y la retórica religiosa eran frecuentes en las *Mañaneras* de AMLO, han desaparecido en las de Sheinbaum.

⁵⁴ Sheinbaum, liderando la coalición «Juntos seguimos haciendo camino», venció en las elecciones presidenciales del 02/06/2023 con el 59,76%, sucediendo a AMLO, para tratar de construir el «segundo piso», en continuidad con el proyecto de la 4.ª Transformación nacional, que debía suceder a las tres grandes transformaciones históricas: Independencia, Reforma y Revolución.

⁵⁵ El 18/12/2024 la Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco condenando por delito electoral al cardenal Sandoval Íñiguez, por grabar y emitir el 16/04/2024 por *whatsapp* un video tendencioso con ocasión de las campañas electorales federales y locales. Cfr. SALMORÁN DEL VILLAR, Guadalupe, MARVÁN LABORDE, *María*, «El viraje jurisprudencial del TEPJF para anular una elección por violación al principio de separación Estado-Iglesias: el caso de Tlaquepaque», en CAPDEVIELLE, Pauline, SALAZAR UGARTE, Pedro (coords.), *El Estado laico mexicano a 30 años de la reforma constitucional*, UNAM, México, 2023, pp. 185-210.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7168/15.pdf> [consultado el 18/01/2025].

la paz. *Estrategias de políticas públicas para la paz*⁵⁶. Los candidatos Gálvez y Máynez lo respaldaron en su integridad y, con reservas, Sheinbaum, quien solicitó que se anexionara un Documento mostrando sus coincidencias y desavenencias, titulado *Sigamos dialogando. Coincidencias y diferencias con el Compromiso Nacional por la Paz*⁵⁷. Por su parte, en el extremo opuesto, para robustecer la ética laica en la función pública, evitar la injerencia religiosa en el ámbito político y garantizar el voto informado y reflexivo, varios grupos presentaron a los candidatos y a otros destinatarios un *Decálogo por la laicidad*⁵⁸.

El pasado 1 de octubre, en el Congreso, Sheinbaum tomó protesta⁵⁹ como Presidenta constitucional. Seguidamente hubo un programa –artístico, espiritual y celebrativo–, en el que la nueva Presidenta, situada ante una ofrenda ceremonial, participó en un ritual indígena de «limpia» y purificación de su persona y en el que, además, las lideresas indígenas invocaron a los cuatro rumbos y al centro del Universo; el acto concluyó con la entrega del bastón de mando de manos de unas mujeres indígenas y afromexicanas que representaban a los pueblos originarios de México⁶⁰. Sheinbaum se propone mantener el

⁵⁶ CEM, *Compromiso por la paz. Estrategias de política pública para la paz*, CEM, México, 2024, pp. 52.

<https://cem.org.mx/wp-content/uploads/2024/03/Compromiso-Nacional-por-la-Paz.pdf> [consultado el 13/01/2025].

⁵⁷ SHEINBAUM, Claudia, *Sigamos dialogando. Coincidencias y diferencias con el documento «Compromiso por la Paz. Estrategias de Política Pública para la paz» de la Conferencia del Episcopado Mexicano*, México, 2024, pp. 1-6.

<https://www.newsmexico.com.mx/marzonotas/12mzo24sheinbaum-seguridad.pdf> [consultado el 13/01/2025].

⁵⁸ Promovieron el *Decálogo*, los siguientes grupos: Católicas por el derecho a decidir, Universidad La Salle, República Laica, Red Iberoamericana Libertades Laicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre Laicidad, éstos dos últimos, de la UNAM. *Cfr. Decálogo por la laicidad en el marco del proceso electoral de 2024*, México, 2024, pp. 1-2.

https://drive.google.com/file/d/1QHBj8pCYQIQGI3PA_ROonhIAIUx7OUVw/view# [consultado el 13/01/2025].

⁵⁹ Las Leyes de Reforma sustituyeron el juramento religioso previsto en la Constitución de 1824 por la «toma de protesta» –proclamación formal del compromiso que se adquiere–, que se formalizó en la Constitución de 1917, permaneciendo hasta la actualidad para la asunción de cargos públicos.

⁶⁰ El bastón de mando es «símbolo del poder político y espiritual de los pueblos indígenas y afromexicanos. Representa el poder comunal, el noble don de servir al pueblo y de hacer justicia, ya que a través de él las autoridades «gobiernan obedeciendo»... [y con ello reconocen a Sheinbaum] como su legítima gobernante y depositan en ella su confianza y esperanza en el contexto de un nuevo trato basado en su reconocimiento como sujetos colectivos de derecho público, en ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía». *Inicio del segundo piso de la Transformación. Carpeta Informativa. 1 de octubre de 2024*, s.l., s.a., pp. 1-11.

<https://verifica.efe.com/wp-content/uploads/2024/10/774817745-Carpeta-informativa-toma-de-protesta-de-Sheinbaum-1.pdf> [consultado el 11/01/2025].

«humanismo mexicano»⁶¹ como centro ideológico de su programa reformador. Como Presidenta visitó la CEM el 13 de noviembre de 2024.

5.3 Igualdad formal y discriminación real entre religiones y creyentes

La laicidad pretende garantizar normativamente la igualdad entre las religiones, arbitrando medios para solventar los conflictos interreligiosos. Por su parte, las mismas organizaciones religiosas –otrora rivales–, han arbitrado medios para actuar conjuntamente, compartiendo intereses y preocupaciones y promoviendo el respeto hacia todas las tradiciones sagradas y religiosas y hacia los valores humanos que subyacen en ellas. Uno de esos organismos interconfesionales es el Consejo Interreligioso de México (CIM), que publicó un propositivo *Código de ética entre religiones*, en cuya Presentación se afirma que «por motivos religiosos es posible discriminar a cierto tipo de personas en menoscabo de su dignidad humana, así como privarles de sus derechos más esenciales y hasta de la vida misma. En nombre de una forma de religión se pueden encender desde conflictos intrafamiliares hasta crueles conflagraciones internacionales»⁶². Ciertamente, por motivos religiosos se puede ser víctima, pero también victimario.

En cuanto a las víctimas religiosas, la *Encuesta nacional sobre discriminación* (ENADIS) del año 2022, sobre un muestreo en 42.302 viviendas, arroja que un 17.5% de los hombres y un 21.8% de las mujeres mayores de 18 años y más, afirmaron haber sido discriminados por sus creencias religiosas en los 12 meses anteriores, cifra que aumentó al 25.6% en la población indígena de 12 años y más, en los anteriores 12 meses, frente al 38.9% del año 2017⁶³.

⁶¹ INE, *Declaración de principios del humanismo mexicano*, 24/08/2023, pp. 1-9. <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2024/02/INE-DEPPP-HUMANISMO-MEXICANO-Anexo1-DECLARACION-PRINCIPIOS.pdf> [consultado el 12/01/2025].

⁶² Consejo Interreligioso de México, *Código de ética entre religiones*, s.l., s.a., p. 3. https://www.pluralidadyunidadmty.org/wp-content/uploads/2016/07/codigo_etica.pdf [consultado el 17/01/2025]. De tales discriminaciones conoce el CONAPRED, que es la institución rectora que protege a los ciudadanos de toda discriminación o exclusión, promueve políticas públicas y medidas socialmente inclusivas y, por último, recibe y resuelve quejas de particulares o de autoridades federales por presuntos actos discriminatorios. <https://www.conapred.org.mx/> [consultado el 17/01/2025].

⁶³ CONAPRED, *Encuesta nacional sobre discriminación* (ENADIS), 2022. <https://www.conapred.org.mx/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-enadis-2022/> [consultado el 12/01/2025]. Cfr. RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús, «La precaria laicidad del Estado mexicano y el desafío de la discriminación religiosa», en CAPDEVIELLE, Pauline, SALAZAR UGARTE, Pedro (coords.), *El Estado laico mexicano a 30 años de la reforma constitucional*, UNAM, México, 2023,

A pesar del tenor del párrafo 5 del art. 1 de la CPEUM, que prohíbe toda discriminación originada en la religión, México tiene un episodio de su historia reciente –apenas conocido–, que atestigua el hecho de que existen víctimas que han sufrido discriminaciones o delitos cometidos en nombre de la religión: a partir de los años 90 hubo un incremento exponencial de indígenas conversos a los que los líderes de sus comunidades conminaban con violencia a que abandonasen sus pueblos y eso originó reyertas y muertes, como sucedió en la matanza de Acteal de 1997. Los victimarios fueron los caciques de las comunidades que, en su mayoría, eran católicos tradicionales⁶⁴, aunque también hubo cristianos de grupos diferentes al de las víctimas. Éstas fueron, mayoritariamente, cristianos o paracristianos de diferentes denominaciones, aunque también hubo católicos de base. Sucesos como los ocurridos en san Juan Chamula, Zinacantán y Amatenango del Valle –todos ellos en Chiapas–, o en san Nicolás en Ixmiquilpan, en Hidalgo, se han sucedido con regularidad en los últimos 40 años. El número de indígenas forzosamente desplazados, desde el último tercio del siglo xx hasta la actualidad⁶⁵, supera el número de 35.000⁶⁶, principalmente en los Estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.

Aunque en estos supuestos prevalecen situaciones de intolerancia y de fanatismo religiosos, los problemas son complejos, porque existe un trasfondo de poder caciquil, del manejo del dinero municipal y comunitario y de conflic-

155-170; ID., *Laicidad y discriminación*, en SALAZAR UGARTE, Pedro, CAPDEVIELLE, Pauline (coords.), *Para entender y pensar la laicidad*, vol. II, Porrúa, 2013, pp. 503-538.

⁶⁴ En un contexto indígena, los católicos tradicionales no son los tridentinos que reniegan de la evolución de la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II, sino los líderes caciquiles y asamblearios de las comunidades indígenas que mantienen vivos, en sus propias comunidades, los usos y costumbres –llamados «el costumbre»–, heredados por tradición oral de sus ancestros, relativos al régimen de autoridades internas y a su forma progresiva de inserción en la organización comunitaria: el *tequio* o *guelaguetza* como trabajo comunitario, la fiesta como vínculo social y la asignación de cargos cívico-religiosos vinculados al santo patrono y al templo católico de su comunidad. Cfr. MIRANDA TORRES, Roxana P., *El pluriverso jurídico en el constitucionalismo mexicano: análisis de 40 comunidades autóctonas*, Porrúa, México, 2021, pp. 312.

⁶⁵ Cfr. UNHCR/ACNUR, *Desplazamiento interno en México. Julio-diciembre 2022*, pp. 20. <https://www.acnur.org/mx/sites/es-mx/files/2023-05/Boleti%CC%81n.%20Desplazamiento%20Interno%20%28Julio-Diciembre%2022%29.pdf> [consultado el 17/01/2025].

⁶⁶ El número de desplazados es muy incierto y las estadísticas resultan poco fiables. En un sentido más amplio, el *Censo de población de 2020* del INEGI, en un porcentaje de la población de 5 años y más, entre marzo del 2015 y del 2020, un 4% había migrado por inseguridad delictiva o por violencia y un 12.5% lo había hecho por otros motivos. INEGI, *Censo de población de 2020. Demografía y sociedad*. <https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/> [consultado el 17/01/2025]. La última *Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública*, de 2024, no permite medir ni identificar elementos relevantes respecto a la migración interna por motivos religiosos, aunque otros datos del diseño estadístico contribuyen a entender la percepción ciudadana sobre la seguridad en general. INEGI, *ENVIPE*, 2024. <https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/> [consultado el 17/01/2025].

tos agrarios y de delimitación de lindes. El conflicto se origina cuando las autoridades tradicionales y la asamblea comunitaria, basándose en sus usos y costumbres ancestrales, exigen a sus comuneros el cumplimiento de un cargo o de un encargo que rechazan los conversos por considerar que su cometido sería incompatible con las prescripciones de la nueva religión que han profesado. Mientras que los conversos se sienten discriminados por motivos religiosos, los victimarios consideran que los mismos conversos se habrían autoexcluido de sus comunidades al no querer participar en el modo de vida tradicional que les caracteriza, como puede ser el culto a los santos, las fiestas y festejos —en los que se ingieren alimentos y bebidas alcohólicas prohibidas para los conversos, la participación obligatoria en cargos públicos que son cívico-religiosos o la dedicación de tiempo a trabajos comunales no remunerados.

Los conflictos motivados por intolerancia religiosa tienen un tratamiento especial que difiere del resto de los conflictos religiosos⁶⁷. Los presuntos discriminados pueden acudir a instancias municipales o privadas —ONGs, asociaciones diversas—, o acudir a las áreas de asuntos religiosos a nivel estatal o, en asuntos supraestatales o de especial complejidad, a nivel federal, a la Comisión nacional de derechos humanos (CNDH)⁶⁸, al Consejo nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED)⁶⁹ y a la Dirección General de asociaciones religiosas (DGAR)⁷⁰, aunque frecuentemente acuden directamente a instancias penales porque anteponen los efectos producidos por los presuntos actos delictivos —daños, agresiones, lesiones—, a las causas que las provocan —

⁶⁷ El último párrafo del art. 37 del RLARCP considera que, a «efectos del presente Reglamento, serán consideradas como formas de intolerancia religiosa, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en motivos de carácter religioso, sancionada por las leyes, cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo de las garantías tuteladas por el Estado».

⁶⁸ *Ley que crea la CNDH* (25/06/2018); anteriormente, *Ley de la CNDH* (29/06/1992, reformada).

⁶⁹ *Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación* (11/06/2003, reformada). Cfr. SALAZAR UGARTE, Pedro, *La laicidad: antídoto contra la discriminación*, CNPD, 2007, pp. 63. https://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/La-laicidad_antidoto-contra-la-discriminacion_Pedro-Salazar.pdf [consultado el 21/12/2024].

⁷⁰ DGAR. <http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/> [consultado el 04/01/2025]. Vide DGAR, *Estrategia nacional para la promoción del respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa*, s.l., s.a., pp. 36. <http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsuntosReligiosos/Documentos/Corona/Estrategia.pdf> [consultado el 5/01/2025]. El *Manual de organización específico de la DGAR: unidad de asuntos religiosos, prevención y la reconstrucción del tejido social* (25/04/2023) fija su objetivo en «instrumentar la política del Poder ejecutivo Federal en materia religiosa de conformidad con los preceptos constitucionales, respetando el carácter laico del Estado y el principio histórico de la separación del Estado y la iglesia, para contribuir en el pleno ejercicio de la libertad de culto, creencias religiosas y fomentar la cultura de la tolerancia con respecto a la pluralidad religiosa, así como promover la reconstrucción del tejido social y la cultura de la paz» (n. 21).

discriminación o intolerancia religiosas–, máxime cuando apenas existe efectividad administrativa ante quejas de particulares⁷¹.

Además de ventilarse estos asuntos en la justicia ordinaria, en los Tribunales Superiores de Justicia de unos pocos Estados –Oaxaca, Toluca, Chihuahua–, se han constituido desde el 2016 Salas de Justicia o de Asuntos Indígenas que permiten hablar de un cambio paradigmático en el sistema jurídico de México al incorporar el pluralismo jurídico, con un sistema paralelo al constitucional y legal que es el consuetudinario indígena, con las consiguientes relaciones y conflictos de jurisdicciones. Algunos de estos asuntos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha establecido criterios jurisprudenciales respecto a la libertad religiosa en los contextos comunitarios de los indígenas⁷².

5.4 El cuestionamiento de la laicidad desde los sistemas normativos internos indígenas

Para muchos indígenas de México, el primer contacto con la realidad comunitaria viene de la mano de la religión y no de la política. Se sienten más próximos a las autoridades comunitarias y a las religiosas que a las municipales o a las estatales, compartiendo una misma persona múltiples ciudadanías con varios sistemas normativos a la vez, como ha destacado Juan Martínez⁷³, haciendo un llamado a que se den las condiciones legislativas para que se respeten y regulen estas particularidades de los entornos indígenas, afirmando que «ante los procesos que se están presentando, los problemas propios del sistema y el nuevo contexto en que se desenvuelven, para que la comunidad preserve su derecho a la diferencia y la autodeterminación, hay un proceso permanente de cambios a sus sistemas de organización. Y el Estado mexicano debe respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos, realizando los cambios legislativos e institucionales para que sean viables»⁷⁴.

⁷¹ La DGAR sólo registró unos 150 casos de intolerancia religiosa entre 2011-2023. La DGAR brinda un proceso de mediación con un amigable componedor a las partes con conflictos intraconfesionales (arts. 31-38 LARCP). Cfr. AA.VV., *Promoviendo tolerancia y paz desde la diversidad religiosa: la experiencia de Chiapas*, SEGOB, México, 2023, pp. 54.

⁷² Cfr. SCJN, Segunda Sala, *Amparo en Revisión 1041/2019, de 8 de julio de 2020*, en SCJN, *Cuadernos de Jurisprudencia. Libertad religiosa. Actualizado hasta marzo de 2022*, 2022, pp. 45-55.

⁷³ Cfr. JUAN MARTÍNEZ, Víctor Leonel, *Los múltiples rostros de la ciudadanía. Multiculturalidad, representación, política y poder local*, PyV, México, 2022, pp. 161-278.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 361.

Con tímidos reconocimientos en reformas constitucionales previas, por fin la reforma de los párrafos 2 y 4 del art. 2 de la CPEUM, del 30 de septiembre de 2024, establece que «la Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas... que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones... normativas... o parte de ellas... El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional». En este sentido, aunque la laicidad es un indiscutible principio informador de la jurisdicción común que desde la Constitución obliga a toda norma de desarrollo, no parece que la laicidad tenga igual rango en la jurisdicción indígena, donde, como hemos visto, existen costumbres cívico-religiosas de obligado cumplimiento para quienes se autoadscriben como indígenas, siendo esta autoadscripción un criterio subjetivo que se deja al albur de los propios interesados el considerarse y el ser tenidos como tales⁷⁵.

Esta duplicidad de sistemas normativos –el común y el indígena–, puede producir una desarmonía práctica respecto a la laicidad, si se resiente por las dos velocidades jurídicas de la nación y porque se acaben creando derechos personales especiales. Si existe una excepcionalidad étnica, sin que eso sea discriminatorio, ¿por qué no plantear una excepcionalidad religiosa, sin que eso tampoco sea discriminatorio? Ya lo fue en el pasado medieval, cuyo derecho era personal de raíz religiosa.

La respuesta parece provenir del mismo art. 2, que continúa afirmando que «esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. II. Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución. La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente, en los términos de esta Constitución y leyes aplicables».

Aunque a nivel teórico no cabe duda de la vigencia de la laicidad también en el sistema normativo indígena, siguen sin resolverse, a nivel práctico, las

⁷⁵ Sin embargo, en materia electoral quienes se autoadscriben como indígenas deben probar que mantienen un vínculo con la comunidad cuando aspiren a elaborar una candidatura por una acción afirmativa indígena, en lo que se denomina «autoadscripción calificada». En sus orígenes, la adscripción fue por compartir rasgos biológicos, lingüísticos o de residencia.

aporías existentes entre lo establecido en la legislación común y la praxis propia de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas⁷⁶. Esta es, por tanto, otra brecha más en la que se está deconstruyendo la laicidad.

5.5 El constructo laico mal construido

El primer *Estudio* estadístico acerca de la laicidad, publicado en 2015, constataba que, a pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de las leyes de reforma –casi 170 años–, una parte considerable de la sociedad mexicana demandaba un acercamiento entre el Estado y las religiones, sin que eso se perciba como una amenaza al Estado ni al *status quo* de los valores y principios en que se sustenta.

Afirmaba dicho *Estudio* que era

«importante complejizar la categoría de secularización para evitar asociarla simplemente con el decaimiento de prácticas, valores y creencias religiosas... los valores religiosos no desaparecen, pero son desplazados hacia la esfera espiritual... Las respuestas sobre laicidad, tolerancia y diversidad religiosa plantean un reto para el futuro. Considerando las características históricas del régimen posrevolucionario mexicano, sorprende que una proporción tan grande la población encuestada se muestre tolerante o favorable a la inclusión de la religión en la política. Si bien en algunos rubros el rechazo era tajante, en otros –medios de comunicación, enseñanza de tesis religiosas en las escuelas, “consagración” de entidades políticas a fuerzas espirituales, influencia de autoridades religiosas sobre voto y gobierno, entre otros–, la opinión se encontraba dividida, cuando no francamente favorable a una mayor flexibilización del régimen laico. Quizá esto sea un reflejo de lo que algunos autores han llamado la “desprivatización religiosa” contemporánea, entendiendo por ella el rechazo de las religiones a permanecer en el espacio privado en el que el proyecto de modernidad liberal las había confinado, sin que esto suponga una amenaza a la convivencia plural y democrática de las sociedades. Quizá sea lo contrario y se trate de remanentes confesionales del monopolio religioso y proyectos políticos que quisieran

⁷⁶ Sobre las nuevas formas de representación, en un entorno indígena, véase JUAN MARTÍNEZ, Víctor Leonel, cit., pp. 93-160.

regresar a la simbiosis entre instituciones político-estatales y religiosas. De cualquier manera, se trata de una legítima divergencia de opinión»⁷⁷.

Este texto muestra la polarización social por la forma de organizar el Estado, pero –a diferencia de lo que ocurre en ambientes académicos, mucho más vehementes en los posicionamientos ideológicos acerca de la laicidad–, los ciudadanos, aunque tengan sus prioridades y preferencias, no se posicionan con apasionamiento.

Esta sería la última deconstrucción de la laicidad. A excepción de un reducido grupo de personas interesadas en que el debate acerca de la laicidad se lleve hasta sus últimas consecuencias, en un sentido –mayor apertura a las religiones en el espacio público–, o en otro –manteniendo el *statu quo* establecido por los beneméritos padres de la nación–, para la mayoría de la población mexicana este debate ha dejado de tener actualidad y relevancia, aunque mantengan todos ellos opiniones más o menos fundadas al respecto. El «pasotismo» y la indiferencia, signos de los tiempos actuales, facilita que todos los interlocutores se pongan de acuerdo y alcancen un consenso pragmático, no porque piensen igual, sino porque, a pie de calle, los ciudadanos, pensando distinto, no mantienen opiniones que consideren que tengan una relevancia tal que los lleve a defenderla denodadamente.

6. RECONSTRUYENDO LA LAICIDAD

6.1 Visión panorámica

La relación entre la Iglesia católica y el Estado mexicano ha transcurredo por varias etapas históricas. Durante la Conquista y la Colonia, los fines de la Iglesia católica y del poder político se solaparon *de facto*. La Iglesia desempeñó un rol directivo en los primeros años de la Independencia.

⁷⁷ SALAZAR UGARTE, Pedro, BARRERA ROSALES, Paulina, ESPINO ARMENDÁRIZ, Saúl, *Estado laico en un país religioso. Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad*, UNAM, México, 2015, pp. 200-203; *cfr.* DE LA TORRE, Renée, GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Cristina (coords.), *Atlas de la Diversidad religiosa en México*, Congreso del Estado de Jalisco, Guadalajara, 2007, pp. 335.

file:///C:/Users/Jos%C3%A9%20Luis/Downloads/ATLAS_DE_LA_DIVERSIDAD_RELIGIOSA_EN_MEXI%20(2).pdf [consultado el 16/12/2024]; ENCREER/RIFREM, *Encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México. 2016*, SEGOB, 2021, pp. 66.

<http://asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Varios/EN-CREER.pdf> [consultado el 16/01/2025].

cia. A la Iglesia no le quedó más remedio que aceptar, contra su voluntad, el *statu quo* que las Leyes liberales de Reforma imprimieron a mediados del siglo XIX. Durante la segunda mitad del XIX, Estado e Iglesia coexistieron en un entorno secularizado, sin relacionarse institucionalmente. Durante la primera mitad del siglo XX los revolucionarios y los Presidentes del PRI radicalizaron el laicismo del Estado con leyes antieclesiales y anticlericales que polarizaron la sociedad y enfrentaron a los ciudadanos. En la segunda mitad del siglo empezó un proceso de distensión que ha dado lugar, recientemente, a una fase de convivencia y colaboración respetuosa entre ambos órdenes, iniciadas en 1992, en el marco del V Centenario, con el establecimiento de relaciones entre México y la Santa Sede, con las visitas de los Papas a México, con la reforma legislativa del CPEUM y con la entrada en vigor de la LARCP.

El subjetivismo –y, de alguna forma, la autoadscripción religiosa–, parece abrirse paso paulatinamente como criterio de pertenencia religiosa *de facto*, por encima de los tradicionales elementos objetivos, como podrían ser las creencias o la inserción organizacional. Los caminos de las religiones y de las espiritualidades se entrecruzan y, a la vez, ambas interactúan con los valores cívicos y con la moral pública, que son los puntos de encuentro de cosmovisiones, creencias e increencias. El universo religioso actual difiere del que existía cuando se promulgaron las Leyes de Reforma, la CPEUM de 1917 y la legislación subsiguiente del siglo XX. Hoy día, la Iglesia católica ha dejado de ser el referente normativo para el resto de las organizaciones religiosas y la normalización de éstas se ha concretado en un país religiosamente plural y dispar. A pesar de los avances significativos de agnósticos, increyentes y ateos en las Encuestas, México sigue siendo un país religioso, aunque viva la religión –como tantas cosas–, a su manera, «a la mexicana», en un mestizaje religioso, identitario y social que es inclusivo y que tiende a diluir lo religioso concreto en un etéreo espiritual que es flexible y voluble.

La Francia revolucionaria tuvo como principios estructurales e identitarios la *liberté*, la *égalité*, la *fraternité* y la *laïcité*⁷⁸. Francia ha transferido cultural, política y jurídicamente la laicidad a otros países, aunque la recepción haya sido diferente en todos ellos porque no es un concepto unívoco, de ahí su nece-

⁷⁸ La Constitución vigente, de 1958, proclama en su art. 1 que «Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión. Respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada».

saría adjetivación⁷⁹, en lo que Salazar Ugarte denomina «un archipiélago de laicidades»⁸⁰.

En los últimos años del siglo xx e inicios del XXI, al hilo del estudio de la LARCP y del RLARCP, diversos autores están reflexionando acerca del alcance de la laicidad en México. Desde perspectivas diferentes, como el constitucionalismo, el derecho eclesiástico, la filosofía del derecho, la sociología, la antropología, la etnología, la filosofía, la historia o la eclesiología, Jorge Adame Goddart, Roberto Blancarte, Bernardo Barranco Villafán, Raúl González Schmal, Jorge Lee Galindo, M.^a Concepción Medina, Mariana Molina Fuentes, Alberto Patiño, Felipe Gaytán Alcalá, Rosas Salas, Pedro Salazar Ugarte, Pauline Capdevielle, Renée de la Torre, Javier Saldaña, Faviola Rivera Castro, Guillem Compte Nunes, Elio Masferrer Kan, José Luis González Martínez y José Luis Soberanes, entre otros, ponen el acento en una laicidad necesitada de la colaboración inclusiva de agentes religiosos, sociales y culturales –entre los que están las religiones, las convicciones filosóficas y los saberes ancestrales–, o postulan por una laicidad purista y marcadamente laica y liberal, alrededor de proyectos editoriales como son los 40 volúmenes de la *Colección de los Cuadernos Jorge Carpizo. Para entender y pensar la laicidad* y los 23 volúmenes de la *Colección de Cultura Laica*, ambos de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Además, como muestra del interés que el estudio de la laicidad suscita en México, diversos Centros superiores de investigación de México (la UNAM, la UdeG, el Colegio de México, la Ibero, la ENAH) han abierto líneas de investigación relativas a esta temática, estudiándolo como tal o de forma transversal con otras temáticas históricas, jurídicas, antropológicas, etnológicas o sociológicas, entre otras. Destacan la Red de investigadores del fenómeno religioso en México (RIFREM); la Cátedra extraordinaria «Benito Juárez» de libertades laicas y los diversos Institutos de la UNAM –el de investigaciones jurídicas (IJ), históricas (IH), antropológicas (IA) y sociales (IS)–, en Centro de estudios de las religiones en México (CEREM); el Laboratorio de Investigación del fenómeno religioso en la sociedad contemporánea, el Programa Universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad (PUIC); el Programa interdisciplinario de estudios sobre las religiones (PIER); el Instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de México (INEHRM); el

⁷⁹ Laicidad positiva (NAVARRO-VALLS), caleidoscópica (LLAQUET), liberal (RIVERA CASTRO), republicana (BLANCARTE), colaborativa (MARTÍNEZ TORRÓN), inclusiva (ARELLANO RODRÍGUEZ/FARIAS TRUJILLO), atea (MARSET), etc.

⁸⁰ SALAZAR UGARTE, Pedro, *Un archipiélago de laicidades*, en SALAZAR UGARTE, Pedro, CAPDEVIELLE, Pauline (coords.), cit., vol. I, pp. 31-66.

antiguo Centro de investigaciones superiores del Instituto nacional de antropología e historia (CIS-INAH), hoy reconvertido en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); el Colegio de etnólogos y antropólogos sociales (CEAS) o diversos Foros, como el Foro Intereclesiástico Mexicano (FIM), el Foro Cívico México Laico o en el Foro latinoamericano de antropología del Derecho (FLAD).

Aunque algunos estudios se centran en la dimensión teórica, para evitar divagar acerca de lo abstracto —que tiende a ser más abstruso, sobre todo si se prescinde de las circunstancias concretas—, es mejor concretar la laicidad en el Estado laico: la auténtica laicidad es la que permite al Estado ser auténticamente laico (*in facto esse*). Pero como el Estado es un organismo vivo, el Estado será laico *in fieri*, construyéndose en una evolución que tenga en cuenta respuestas concretas de laicidad ante estímulos concretos de la sociedad que le interroga y que son cambiantes en la historia. Blancarte considera que este «régimen social de convivencia [que es la laicidad], cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y [ya] no por elementos religiosos... una mirada distinta, distanciada del modelo francés de laicidad, nos permite entender... la laicidad como un proceso, más que como una forma social fija o definitiva»⁸¹, y considera que la laicidad mexicana «forma parte de la identidad nacional, con matices laicos y anticlericales, que es la matriz cultural»⁸².

El marchamo de la laicidad mexicana tiene mucho que ver con su historia particular, la cual se configura, también, desde una matriz indígena y católica que ha permanecido en el tiempo. Esa matriz se enriqueció con los valores liberales y republicanos en el siglo XIX y, recientemente, con el pluralismo religioso y con los aportes de las nuevas generaciones de derechos. Este contexto histórico y una Iglesia católica muy romanizada, dogmática, clerical y empoderada hasta el último tercio del siglo XX impidió la recepción pacífica de la laicidad y motivó la promulgación de medidas radicales de contención eclesial y clerical, que fueron modelo para otras legislaciones⁸³, aunque dividieron a la sociedad mexicana.

⁸¹ BLANCARTE, Roberto, «Definir la laicidad (desde una perspectiva mexicana)», *Revista internacional de Filosofía política* 24 (2004), pp. 25-26.

⁸² *Idem*, «Laicidad y secularización en México», en BASTIAN, Jean-Pierre (coord.), *La modernidad religiosa: Europa latina y América Latina en perspectiva comparada*, FCE, México, 2004, p. 50.

⁸³ BAUDÉROT, Jean, «Representación e influencia de la laicidad mexicana sobre la laicidad francesa», en BLANCARTE, Roberto (coord.), «Las Leyes de Reforma y el Estado laico: importancia histórica y validez contemporánea», El Colegio de México, México, 2013, pp. 141-165. *Vide* artículos del monográfico de la Revista *Ius* n.º 10/38, de julio-diciembre de 2016, consagrado a la

6.2 Consensos respecto al alcance de la laicidad

Una crítica que puede hacerse a la laicidad es que haya reforzado su dimensión política en detrimento de la societaria, como lo expuso González Martínez, afirmando que

«la principal sospecha que nos anima es que la laicidad, desde que se esbozó como nuevo paradigma político, creció mucho desde el punto vista cuantitativo, pero poco o nada desde el cualitativo... [y en una actualidad] que reclama un salto a otra 'era política' de las comunidades por encima de los partidos, se siente que el logro del Estado laico al respecto es simplemente insuficiente. En esencia, aunque el pacto de laicidad es, según lo dicho, la plataforma mínima indispensable para una sociedad democrática e inclusiva, no basta una constitución laica administrada desde el poder para que todos los grupos y personas sean social, económica y jurídicamente incluidos en la comunidad de la ciudadanía. Por último, nos atreveríamos a decir que la complejidad de algunos de los conceptos expresados y de las posibles resistencias que pudieran provocar, se deriva de la doble identidad sociológica del Estado laico: ante lo religioso se define con acierto como Estado laico autónomo; pero ante lo social y societario [según Tönnies] no es otra cosa que el Estado burgués reforzado por las nuevas tecnologías»⁸⁴.

El componente fuertemente ideologizado que tiene la laicidad requiere de consensos estables entre todos los actores políticos y sociales —a saber, políticos, funcionarios, ciudadanos y organizaciones religiosas, espirituales y de conciencia—, para mantener los mismos contenidos, pero adaptándolos a los tiempos actuales. Quizás la cuestión de fondo no sea solamente el solipsismo religioso que los más laicistas achacan a las religiones en su incapacidad por implicarse en el debate acerca del interés común, sino también que después de tanto tiempo de vigencia de la laicidad, el Estado no haya sido capaz de explicarse y de hacerse comprender adecuadamente para que los destinatarios de dichas medidas las asumieran como propias y no como una imposición guber-

influencia de la Constitución mexicana de 1917 en diferentes países latinoamericanos. Acerca de la influencia de esta Constitución en Europa, África y Asia, diferentes autores en FIX-ZAMUDIO, Héctor, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coords.), *Influencia extranjera y trascendencia internacional. Derecho comparado*. Primera parte. Secretaría de la República, México, pp. 535; y en la Constitución española de 1931, VILLABONA, M.^a Pilar, «La Constitución mexicana de 1917 y la española de 1931», *Revista de Estudios Políticos* 31-32 enero-abril (1983), pp. 199-208.

⁸⁴ GONZÁLEZ MARTÍNEZ, José Luis, «Las cuentas pendientes de la laicidad y sus fronteras conceptuales», *Cuicuilco Revista de ciencias antropológicas*, 21/61 sept.-dic. (2014), p. 9; p. 41.

nativa. Había fallado el *marketing* estatal, que impuso su agenda laica en un nivel político sin esforzarse en sumar a las religiones y a otros agentes sociales para que conocieran y reconociesen las bondades laicas, como acertadamente indicaba González Martínez.

En los años 90 el Estado intentó rectificar *–fortiter in re, suaviter in modo–*, para hacer inteligible la laicidad, sin que ésta cambiase sustancialmente. El Presidente Felipe Calderón, en la ceremonia de bienvenida al Papa Benedicto XVI, en 2012, lo expresó diciendo: «Visita, usted, un país donde avanzamos hacia la consolidación de nuestra democracia, con pleno respeto a la libertad, a la libertad de culto, a la pluralidad política, a la pluralidad religiosa, a la pluralidad ideológica, que es posible en un Estado laico, como el que somos»⁸⁵. Las religiones han entendido este nuevo mensaje de los políticos *–o, quizás, el mismo, pero explicado con un nuevo lenguaje–*, y ellas mismas han cambiado su discurso. El reciente acercamiento entre el poder político y el factor religioso ha serenado los ánimos y ha permitido acrisolar el Estado laico, alcanzando un equilibrio en su aplicación práctica, con consensos que resultan aceptables para la mayor parte de los mexicanos, a pesar de que, como hemos visto, no consideran que este debate sea algo esencial en sus vidas ni en la de México.

«Sólo la laicidad *–afirma Llamazares Fernández–*, hace posible cimentar el pacto para la convivencia, sobre estos tres principios o pilares: asunción por todos del compromiso de respetar, defender y promocionar los valores comunes y las normas éticas derivadas (moral pública); de respetar, defender y promover los valores diferenciales siempre que no entren en contradicción con los comunes y, finalmente, de aceptar unas normas democráticas de convivencia comunes»⁸⁶.

Ni la Iglesia católica es, hoy día, un peligro para la estabilidad nacional, ni los eclesiásticos o los ministros de culto de cualquier religión tienen en la actualidad las prevenciones antimodernistas que tuvieron en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, ni el Estado legisla a favor o en contra de grupos o *lobbies* a la sombra. Siendo un sistema perfectible, la exposición de opiniones *–con acuerdos y disensos legítimos en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho–*, compete también a los grupos religiosos, espirituales y de convic-

⁸⁵ ROSAS, Tania, «México está de pie: Calderón», *El Economista*, 12/03/2012. <https://www.economista.com.mx/politica/Mexico-esta-de-pie-Calderon-20120323-0106.html> [consultado el 12/01/2025].

⁸⁶ LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, «Laicidad y Acuerdos», *Laicidad y libertades: escritos jurídicos* 4 (2004), p. 164. Acerca de los elementos que conforman el pacto para la convivencia y el pacto para la justicia, véase, del mismo autor, ID., «Pacto para la convivencia: pilares del Derecho Constitucional», *Revista Jurídica de la Universidad de León* 12 (2024) 15-29.

ciones filosóficas, de igual forma que corresponde al Estado respetarlos y legislar atendiendo a los intereses generales de los ciudadanos, después de que éstos hayan legitimado a los gobernantes en las urnas.

Masferrer Kan lo expresaba constatando que

«el agotamiento del modelo de Estado liberal decimonónico, implica una debilidad estructural de los Estados latinoamericanos y que en esta crisis política, económica y social por la que atravesamos, existe un retorno a las lealtades primordiales; en este contexto una buena hipótesis de trabajo es que las estructuras religiosas dinámicas y con excelentes resultados en la conquista de nuevos adeptos serán actores importantes en los procesos de reformulación de los Estados latinoamericanos... el campo religioso en México está en un proceso de expansión, de diversificación y de transformación de sus límites, configurando un nuevo espacio social: el campo político-religioso, que implica una reformulación de la hegemonía del Estado y de su sistema político»⁸⁷.

En cuanto a la relación entre la libertad religiosa y la laicidad, la CPEUM consagra en su art. 1 el principio *pro persona* como criterio de interpretación y de aplicación de los derechos constitucionales y en su art. 24 vigente se afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, ampliando así el histórico derecho al culto para incorporar los derechos humanos reconocidos en las *Declaraciones de derechos* (art. 18 DUDH), lo que, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto en la concepción mexicana de la laicidad, como manifiestan Capdevielle⁸⁸ y Patiño⁸⁹, poniendo en

⁸⁷ MASFERRER KAN, Elió, *¿Es del César o es de Dios? Un modelo antropológico del campo religioso*, UNAM, México, pp. 72-73. Con un sugerente cambio de paradigma y nuevas perspectivas, véase COMPTE NUNES, Guillem, *Laicidad y religión civil*, UNAM, 2022, pp. 110.

⁸⁸ «Este giro hacia los derechos humanos impactó también en nuestra manera de pensar y vivir la laicidad... [El Estado laico mexicano] pasó de entenderse en términos de una relación institucional (accidentada) entre el Estado y la Iglesia, a una perspectiva (más sosegada) orientada a la protección de los derechos y deberes fundamentales en contexto de pluralismo, aunque es cierto que existen aún varios focos de polarización vinculados con el tema». CAPDEVIELLE, Pauline, «Cien años de laicidad. El Estado laico mexicano en la Constitución de 1917», en AA.VV., *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones*, vol. V/Sección 2.^a: *Transversalidad constitucional con prospectiva convencional*, SCJN, 2016, pp. 853-854. CAPDEVIELLE ha evolucionado en sus trabajos posteriores alineándose con la laicidad de corte liberal.

⁸⁹ «La propuesta de adición del artículo 40 de la CPEUM con objeto de indicar que la República mexicana es «laica» quedaría incompleta si no viene adosada con el reconocimiento de la libertad religiosa como derecho humano fundamental de todos los habitantes de México. En tal virtud, la reforma del artículo 24 de la CPEUM es insoslayable, con el propósito de reconocer expresamente la libertad religiosa en los mismos términos que lo hacen los Tratados de Derechos Humanos vigentes en México... por eso mi insistencia en reconocer a la par de un Estado laico un Estado garante y promotor del derecho de libertad religiosa en México». PATIÑO REYES,

valor las aportaciones del derecho a la libertad religiosa. Por el contrario, el otro sector doctrinal insiste en los riesgos de incorporar acríticamente la libertad religiosa –máxime cuando se quisiera contraponerla a la laicidad–, o de explicar dicha libertad religiosa desde la hermenéutica de las organizaciones religiosas y no desde la libertad de conciencia, desde las convicciones y desde la laicidad. Tal planteamiento, para De la Torre⁹⁰, sería un caballo de Troya que dinamitaría el sistema desde dentro y, para Rivera Castro⁹¹, dicho debate distorsionaría la laicidad para empoderar a las organizaciones religiosas.

Oponer el derecho humano de la libertad religiosa al derecho constitucional de la laicidad –o maximizar uno en detrimento del otro–, nos alejaría de la realidad, pensando que una mayor libertad religiosa debe redundar necesariamente en una menor laicidad o viceversa. Ciertamente, el debate debe iniciarse delimitando exactamente qué se entiende por ambos y, una vez consensuados sus contenidos, alcanzar un equilibrio que permita dotar de la máxima virtualidad a ambos por igual. Ni la laicidad debe servir para controlar las organizaciones religiosas, ni la defensa a ultranza –y unidireccional–, de la libertad religiosa puede servir de tapadera para que las confesiones religiosas, sus ministros de culto o sus creyentes se exoneren del cumplimiento de los deberes cívicos.

Alberto, «*La República laica y la libertad religiosa en México*», en MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, MESEGUER VELASCO, Silvia, PALOMINO LOZANO, Rafael (coords.), *Religión, matrimonio y Derecho ante el siglo XXI: Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls*, vol. I, Iustel, Madrid, 2013, pp. 1684-1685. En el mismo sentido, la mayor parte de los autores de la obra TRASLÓSHEROS, Jorge E. (coord.), *Libertad religiosa y Estado laico. Voces, fundamentos y realidades*, Porrúa, México, 2012, pp. 267.

⁹⁰ «La exigencia de libertad religiosa ha sido el caballo de Troya del ala conservadora de la Iglesia católica para revertir la laicidad en México». DE LA TORRE, Renée, «La laicidad en México desafiada por la libertad religiosa: dilemas y retos contemporáneos», en CAPDEVIELLE, Pauline, SALAZAR UGARTE, Pedro (coords.), cit., p. 67.

⁹¹ «Las reformas de 1992, si bien reestablecieron derechos y libertades protegidos por la laicidad liberal mexicana, apuntan hacia una concepción de «libertad religiosa», propia del liberalismo estadounidense, según la cual ésta habría de ejercerse... con mínima regulación oficial. Esta concepción de la libertad religiosa no solo es ajena a la laicidad liberal de la Reforma, sino que es contradictoria con ella... [la cual está] encaminada a mantener la independencia del Estado respecto de iglesias y doctrinas religiosas, así como la supremacía del primero sobre las iglesias... no es casual que en su lucha contra el Estado laico la iglesia católica siempre haya reclamado derechos naturales anteriores al Estado y que hoy en día se presentan en el lenguaje de los derechos humanos... las reformas de 1992 no representan un retorno a la laicidad liberal de la Reforma... también legitimaron el posible empoderamiento económico y social de las asociaciones religiosas». RIVERA CASTRO, Faviola, «Modelos de laicidad. Las reformas de 1992 y la laicidad liberal mexicana», en CAPDEVIELLE, Pauline; SALAZAR UGARTE, Pedro (coords.), cit., pp. 19-20; p. 26 nota 14; p. 34. El rechazo de los Estados a someterse a un derecho natural objetivo –que era ajeno y anterior a la existencia misma de los Estados–, llevó a la Iglesia católica a buscar un nuevo fundamento –inicialmente rechazado por su dimensión subjetiva–, en la objeción de conciencia, principalmente en cuestiones morales.

El objetivo tendencial de la laicidad que deben promover los gobernantes –además de legislar con perspectiva laica–, es el de crear acciones propositivas que configuren el espacio público como un lugar beneficioso para el «nosotros», al margen de «mis» preferencias, opiniones o creencias particulares, morales y organizativas. La laicidad no nos pide ni renunciar a «mis» particularidades ni integrarlas en las preferencias ajenas, sino colaborar en un planeamiento de la convivencia que tenga como punto de partida y de llegada el «nosotros», que nos es común y que se concreta en el interés público. Por su parte, al Estado le compete, con su legislación laica, garantizar que el proceso de la primacía del «nosotros» pueda llevarse a cabo sin interferencias.

6.3 Una laicidad en evolución y progreso

Blancarte se pregunta si México está necesitado –simbólicamente hablando– de una nueva guerra de reforma que permita a los mexicanos construir un camino común a partir del interés público, en un contexto en el que se está reconfesionalizando tanto el espacio público, la misma idea de laicidad y los propios símbolos⁹², porque con el paso del tiempo la laicidad ha ido adquiriendo formas contrarias al espíritu que las creó, principalmente en los países populistas, por el uso ambiguo de la religión que hacen sus líderes para reforzar la identidad nacional, frente a las intrusiones extranjeras o a los enemigos internos, «en ocasiones, entre los gobiernos de este tipo y algunos grupos religiosos se establecen alianzas no-formales, usándolas políticamente e integrándolas en sus esquemas ideológicos»⁹³.

La LARCP está en vigor desde hace 33 años y algunos autores se plantean la conveniencia de actualizarla al compás del nuevo contexto mexicano y global. No cabe la menor duda de que la reciente reforma constitucional, del 30 de septiembre de 2024, del extenso art. 2 de la CPEUM⁹⁴ en materia de pueblos y co-

⁹² BLANCARTE, Roberto, «Actualidad de las Leyes de Reforma; viejos problemas y nuevos retos para el Estado mexicano», en *idem* (coord.), «Las Leyes de Reforma y el Estado laico: importancia histórica y validez contemporánea», Colegio de México, México, 2013, pp. 310. Controversias recientes debidas a la presencia de simbología popular de origen religioso-cultural en el espacio público mexicano han sido, por ejemplo, la instalación de belenes por los poderes públicos, en 2023 o la instalación de esculturas religiosas, la propaganda religiosa con fines electorales o la suspensión de clases escolares por festividades religiosas, en 2024.

⁹³ BLANCARTE, Roberto, *Democracia y laicidad*, INE, México, 2022, n. 41, p. 90.

⁹⁴ «... Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. A.) Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: ... I. Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Consti-

munidades indígenas y afroamericanos –cuyo Decreto firmó AMLO en su último día como mandatario–, ha alterado sustancialmente el panorama jurídico y político, como la laicidad en sí misma, como ya hemos expuesto en este trabajo. Esta reciente reforma garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos al ser reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un sistema normativo propio en el que las cuestiones religiosas –cargos comunitarios, trabajos comunales, fiestas religiosas, entre otras–, entrelazadas con las seculares, desempeñan un papel relevante⁹⁵.

Parece haber un consenso actual acerca de la necesidad de seguir actualizando el contenido de la laicidad, habida cuenta de los cambios sociales, tan vertiginosos, de los últimos decenios, en los que ha habido un desplazamiento del objeto de la laicidad, que hoy muchos autores –en lo que Blancarte denomina «libertades laicas»⁹⁶–, redirigen hacia los derechos éticos de reciente re-

tución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente, en los términos de esta Constitución y leyes aplicables. II. Elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno... En ningún caso, sus sistemas normativos limitarán los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales... X. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad conforme a las normas aplicables. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política. B.) La Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos» (art. 2 CPEUM). Esta reciente modificación completa las iniciadas en las reformas de 1992 –que reconoció a México como una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas–, y en 2001 –que reconoció algunos derechos, aunque no podían ejercerse en plenitud al ser meras entidades de interés público y no ser sujetos de derecho público con personalidad jurídica–.

⁹⁵ La Sala Superior del TEPJF –modificando el criterio mantenido en los 20 años anteriores–, dictó en 2017 tres Sentencias relevantes –Matatlán vs San Pablo Güila; Ixtlán vs 12 agencias municipales y Tataltaltepec vs Tepenixtlahuaca–, reconociendo la autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas y su derecho a elegir gobierno propio en comunidades autónomas, al margen de sus Ayuntamientos. Cfr: CORDERO AGUILAR, Luis Enrique; JUAN MARTÍNEZ, Víctor Leonel, «Jurisdicción indígena, entre la asamblea y la corte: Caso San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca», INPI, México, pp. 73. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/726099/libro-jurisdiccion-indigena-entre-la-asamblea-y-la-corte.pdf> [consultado el 17/01/2025]; MARTÍNEZ ESTEVA, Nidia Soledad; CORDERO AGUILAR, Luis Enrique, «Pluralismo jurídico: una innovación desde Oaxaca», *Nexos* 8/11/2023. <https://federalismo.nexos.com.mx/2023/11/pluralismo-juridico-una-innovacion-desde-oaxaca/> [consultado el 15/01/2025].

⁹⁶ Cfr: BLANCARTE, Roberto, «Reforma legal y cultura político-religiosa; la reforma de 1992 y sus efectos treinta años después», en CAPDEVIELLE, Pauline; SALAZAR UGARTE, Pedro (coords.), *cit.*, pp. 99-103.

conocimiento, como la autonomía del cuerpo, el feminismo, la eutanasia, los derechos reproductivos y los derechos LGTBI+ que, hoy por hoy, son inasumibles para gran parte de las organizaciones religiosas.

La práctica totalidad de los mexicanos quiere que México sea un país laico. Salvo excepciones minoritarias –y que no cuentan con el respaldo de sus instituciones de pertenencia–, nadie quiere una radical vuelta a tiempos confesionales, pero sí existen tentaciones de micro-reversiones cotidianas en las políticas públicas que tienen que ver con la laicidad. Los líderes religiosos son capaces de valorar, en la actualidad, las aportaciones sociales conseguidas por la laicidad –incluso en la legislación restrictiva del pasado respecto a los derechos y deberes de los ministros de culto–, y son capaces de comprometerse con el interés público⁹⁷, aunque no compartan, muchos de ellos, la extensión de la laicidad a un contenido ético, especialmente al que tiene que ver con la moral sexual y reproductiva y con los derechos feministas de reciente reivindicación y reconocimiento.

Más aún, el carácter tolerante que se presupone a los líderes religiosos los habilita como mediadores en las divergencias o en las contiendas. La formación humanista que han recibido, las ancestrales sabidurías a las que pertenecen, la autoridad e integridad moral que se les supone y el prestigio social del que gozan –lo hemos visto en el caso de Samuel Ruiz en el conflicto armado entre el Estado y el EZLN y en los recientes posicionamientos institucionales ante la corrupción, la violencia y la inseguridad nacionales–, posiciona a los líderes religiosos como buenos conciliadores⁹⁸. Esta colaboración de los agentes sociales y religiosos en la pacificación y progreso del país no los equipara al Estado por cuanto están subordinados al mismo y a las restricciones impuestas por la laicidad en beneficio de todo el tejido social, como lo están igualmente el resto de los ciudadanos. *Mutatis mutandis*, de la misma forma que en Occidente se exige a los inmigrantes que practican otras religiones –entiéndase, el Islam–, que sean respetuosos con las normas y modos de vida de los países de acogida, cualquier Estado está legitimado para exigir a creyentes e increyentes que cumplan el sistema de valores cívicos y normativos que sustentan la convivencia democrática del país.

Cabría, ciertamente, otra opción, bien explicada por Celador Angón, consistente en que los líderes religiosos asumiesen un compromiso político acorde con sus opiniones, creando o integrándose en una formación política no confe-

⁹⁷ Véase el discurso de san Pablo en el Areópago ateniense (*Act.* 17, 22-34); *cfr.* FRANCISCO, Enc. *Fratelli tutti*, nn. 217-218; n. 225.

⁹⁸ *Cfr.* PARODY NAVARRO, José Antonio, «Religiosa mediación y pluralismo religioso. La mediación», *Laicidad y libertades: escritos jurídicos* 21 (2021), pp. 219-243.

sional –dejando de lado su carácter de líderes religiosos, cuyos derechos políticos están limitados *ex art.* 130 CPEUM⁹⁹ y *ex art.* 14 LARCP¹⁰⁰–, constatando entonces el apoyo real que recaban en la sociedad, en igualdad de condiciones

⁹⁹ «El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley» [art. reformado 29-1-2016; 28-1-1992] (art. 130 CPEUM).

¹⁰⁰ «Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán seis meses. Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. La separación de los ministros de culto deberá comunicarse por la asociación religiosa o por los ministros separados, a la Secretaría de Gobernación dentro de los treinta días siguientes al de su fecha. En caso de renuncia el ministro podrá acreditarla, demostrando que el documento en que conste fue recibido por un representante legal de la asociación religiosa respectiva. Para efectos de este artículo, la separación o renuncia de ministro contará a partir de la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación» (art. 14 LARCP). Hoy se cuestiona la integridad y vigencia de las restricciones contenidas en ambos arts., como en TELLO MENDOZA, Martha Alejandra, «¿Siguen siendo válidas las restricciones a los derechos políticos de los ministros de culto?», *Nexos* 20/mayo (2021), s.p.

con los demás partidos políticos. Así se ofertó en EE.UU. a los grupos cristianos antiabortistas, sin que ninguno de ellos quisiera arriesgarse al escrutinio popular del electorado¹⁰¹.

La línea roja de la laicidad radica en que el aparato del Estado someta la legitimación de sus políticas públicas a procedimientos inconstitucionales de aprobación o de rechazo social basados en las creencias o en la existencia de puertas giratorias religiosas que condicionen el ejercicio de su función al servicio de toda la ciudadanía. El «saber estar» de los gobernantes y de los funcionarios es consecuencia del «saber ser» lo que son todos ellos, servidores independientes del interés público y del bien común de la ciudadanía. Eso no significa que los gobernantes sean indiferentes ni a la ética ni a los fenómenos religiosos, sino que, al contrario, de forma ejemplar y ejemplarizante, los gobernantes deben tener altos estándares de ética cívica y de respeto hacia lo espiritual y lo religioso, valorando las éticas, las espiritualidades, las religiones y las convicciones particulares, porque todas ellas deben colaborar en la conformación del interés general y del interés público. La deconstrucción de la laicidad no es la disrupción que destruye lo que con tanto esfuerzo la laicidad ha ido construido hasta el momento presente, sino la capacidad de sopesar y discernir la vigencia de sus elementos para vigorizarlos a la luz de las necesidades actuales. No en vano, como recuerda Blancarte, la laicidad –como la democracia–, es un proceso más que una forma fija o acabada en forma definitiva¹⁰². Es un proceso en permanente construcción, deconstrucción y reconstrucción.

Valadés ha resaltado que la evolución del proceso de la laicidad sigue inconcluso, a pesar de las reformas de 2012 y 2013, porque subsisten normas de origen y contenido confesional, además de símbolos culturales religiosos que denotan lo arraigado del confesionalismo¹⁰³ y que éstas deberían extirparse. Este posicionamiento extremo resulta del todo imposible, porque el derecho y

¹⁰¹ CELADOR ANGÓN, Óscar, «Libertad de conciencia y sistema electoral en Méjico», *Laicidad y libertades: escritos jurídicos* 9 (2009) 115. Este autor pone de relieve el desigual trato que reciben los líderes de los grupos ideológicos no religiosos, sobre los que no pesa restricción alguna a sus derechos electorales activos. *Ibidem*, pp. 113-114.

¹⁰² Cfr: BLANCARTE, Roberto, «El porqué de un Estado laico», en MUÑOZ RUBIO, Julio (coord.), *Contra el oscurantismo: defensa de la laicidad, la educación sexual y el evolucionismo*, UNAM, México, pp. 317-318; y el autor continúa, «de la misma manera que no se puede afirmar la existencia de una sociedad absolutamente democrática, tampoco existe en la realidad un sistema político que sea total y definitivamente laico. En muchos casos, subsisten formas de sacralización del poder, aún bajo esquemas no estrictamente religiosos. Por ejemplo, muchas de las ceremonias cívicas, en el fondo no son más que rituales sustitutivos para integrar a la sociedad bajo nuevos o adicionales valores comunes. De allí que algunos pugnen por una laicización de la laicidad». *Ibidem*.

¹⁰³ Cfr: VALADÉS, Diego, *Estado laico. Reflexiones constitucionales*, Tirant lo Blanch, México, 2021, p. 376.

la política siguen a la vida misma, y no al revés. La completa eliminación – *tabula rasa*–, de la historia y de sus elementos con-formativos, además de tergiversar la historia misma, crearía un *horror vacui* que acabaría llenándose con un nuevo elemento –quizás nuevamente religioso o espiritual–, que podría ser igualmente criticable desde la teoría de una laicidad abstracta e incontaminada por el entorno socio-cultural. En México no puede borrarse ni su pasado confesional ni su pasado laicista: ambos tuvieron su momento y ambos hicieron su aporte a la configuración actual del país. La diferencia es que el confesionalismo forma parte del pasado, mientras que la laicidad, formando parte del pasado, llegó para quedarse en el presente y para seguir estando, de forma permanente, en el futuro. Esa laicidad «a la mexicana» –a pesar de las críticas que recibe–, es un patrimonio inmaterial aceptado por la práctica totalidad de los mexicanos y de sus instituciones y asociaciones, también religiosas.

Nos parece más pertinente partir –y aceptar–, el *status quo* actual de la laicidad –con sus potencialidades y sus limitaciones– y, sobre esta realidad, seguir dotando de contenido al interés público –promoviendo la diversidad y la inclusión y revisando y actualizando la legislación y las políticas públicas a la luz de los tiempos modernos–, mediante el diálogo y la colaboración de los poderes del Estado con los actores sociales y religiosos, en un marco de separación efectiva entre ellos y desde la neutralidad estatal. Si queremos reconstruir la laicidad incorporando en el proyecto a todos los interlocutores, éstos deberán deconstruir, en el espacio público, los absolutos de sus posicionamientos –los dogmatismos religiosos y los estatismos políticos–, aunque, en su ámbito privativo, sigan manteniendo íntegramente sus creencias, convicciones y opiniones.

Estas cuestiones las he planteado en el último Capítulo de mi monografía *Paradigmas religiosos de los pueblos indígenas de México*, afirmando que

«este recorrido nos lleva a un final del camino que podemos sintetizar con tres referencias ineludibles: el sínodo, el ágora y la concordia cívica... La convergencia de todos los actores en un ágora plural nos encamina a un proceso de reconciliación personal, colectiva y nacional. Personas, colectividades y naciones pacificadas y reconciliadas con la historia y con el presente propio y ajeno están en condiciones de afrontar un futuro en convivencia que ponga en valor todas las aportaciones y “hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común” [Francisco, Enc. *Fratelli tutti*,

n. 154]. La construcción espiritual-religiosa de la humanidad (la sinodalidad) y la construcción secular-laica de la sociedad (el ágora) confluyen en una concordia cívica que nos permite entender que los creyentes sólo podrán ser relevantes en el terreno neutral de lo público cuando sean servidores del bien común compartiendo –como proclamaba GS n. 1–, los gozos, angustias, proyectos y sentimientos de la humanidad abstracta y de las personas en concreto y cuando se impliquen, con convicción, en el espacio común de la civilidad, contribuyendo a que la sociedad sea –gracias al comportamiento ético de cada miembro–, un lugar de bienestar, de buen vivir y de “bien ser”. La historia de México, vista en perspectiva, parece estar condicionada por sus acontecimientos milenarios, vividos con aciertos y errores, en aprendizajes colectivos. Queremos creer que estamos en los tiempos iniciales –o al menos en un nuevo principio de época–, que se debe afrontar con esperanza, bregando todos juntos –porque nadie sobra en esta tarea de conformar el futuro del país dejando a las nuevas generaciones de mexicanos unos valores humanos compartidos en armonía–, con la mirada puesta en un futuro prometedor de paz reconciliada»¹⁰⁴.

¹⁰⁴ LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, José Luis, cit., pp. 431 y 435.